



izquierda unida  
Aragón



tejiendo redes  
construimos alternativa

**XI Asamblea**

**Documento Político**



## Índice

### INTRODUCCIÓN

#### **TESIS I. CONTEXTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN POLÍTICA.**

- I. 1. Crisis sistémica, crisis del régimen.
- I. 2. El marco político en Aragón.

#### **TESIS II. LA PROPUESTA DE IZQUIERDA UNIDA. UN NUEVO MODELO SOCIAL Y DE ESTADO.**

- II. 1. La superación del sistema.
- II. 2. Servicios públicos.
  - II. 2. 1. Estado del Bienestar, servicios públicos y protección social.
  - II. 2. 2. Los servicios públicos en el nuevo modelo de desarrollo.
  - II. 2. 3. Educación.
  - II. 2. 4. Sanidad.
  - II. 2. 5. Acción social.
  - II. 2. 6. El derecho a una vivienda digna y la lucha contra los desahucios.
  - II. 2. 7. Justicia.
- II. 3. Igualdad.
- II. 4. Inmigración, paz y solidaridad internacionalista.
  - II. 4. 1. Inmigración.
  - II. 4. 2. Paz y Cooperación.
- II. 5. Cultura.
  - II. 5. 1. La cultura, fundamento de una sociedad libre.
  - II. 5. 2. Ejes esenciales para una política cultural.
  - II. 5. 3. Política lingüística.
  - II. 5. 4. El deporte.
- II. 6. Municipios, instituciones y poder ciudadano.
  - II. 6. 1. Municipios, agentes de cambio social.
  - II. 6. 2. Nuestro papel en las instituciones.
  - II. 6. 3. Un poder indelegable: el poder ciudadano.
- II. 7. Federalismo, un modelo de Estado solidario.

#### **TESIS III. IZQUIERDA UNIDA, HERRAMIENTA PARA EL CAMBIO**

- III 1. La Alianza Social.
  - III. 1. 1. Orígenes y antecedentes.
  - III. 1. 2. La constitución de un Bloque Social y Político.
  - III. 1. 3. El camino para la configuración de ese nuevo sujeto político.
- III. 2. Al rescate de la ética en la política. Una organización transparente.
- III. 3. Una organización que comunica.
  - III. 3. 1. Los medios de comunicación.
  - III. 3. 2. Internet y redes sociales.

## **INTRODUCCIÓN**

*Quisieron enterrarnos pero no sabían que éramos semilla  
Subcomandante Marcos*

El 27 de abril de 1986 se constituía Izquierda Unida como una Plataforma de Fuerzas ante la “ineludible necesidad para recuperar la esperanza que subyace en los anhelos de tantos españoles que se pronuncian por la paz y la neutralidad, el trabajo para todos y la consagración, en definitiva, de una democracia avanzada sin espacios excluidos a la soberanía popular”.

Una respuesta política y social que nació de un proceso largo de movilizaciones, de reuniones, asambleas, de propuestas de confluencia, de interacciones con otras fuerzas políticas, con otros movimientos sociales, del reconocimiento mutuo del papel político de cada actor, de la búsqueda de los puntos comunes y, sobre todo, de la imperiosa necesidad de una alianza unitaria frente al imperialismo, el militarismo y en definitiva frente al orden capitalista, depredador del planeta y generador de injusticias.

Así, el documento político fundador de Izquierda Unida partía de la base que “El 12-M ha confirmado la existencia de un amplio movimiento social que desea una política realmente progresista. Al tiempo que pone de relieve una profunda crisis de representación, con claro desajuste entre los millones de votos progresistas partidarios de la salida de la OTAN y su referente parlamentario.”

La expresión popular previa al referéndum y su reflejo cuantitativo en siete millones de votos, es comparable con las expresiones de contestación que vivimos hoy en nuestras calles y plazas a diario. Las protestas masivas, el amplio espectro social de las personas que participan en ellas y lo inesperado de las mismas en algunos momentos, ponen de relevancia, como ya ocurriera entonces, la existencia de un amplio movimiento social progresista que no se siente identificado con sus representantes, sobre todo por ese bipartidismo que los lleva gobernando durante tres décadas.

Los documentos de esta XI Asamblea buscan poner de manifiesto los principales retos de este momento, tratan de identificar las luchas clave donde hacernos fuertes en la resistencia y aquellas alternativas que, por su capacidad y su profundidad, suponen una palanca de transformación del sistema. Pero sobre todo estos documentos pretenden buscar el itinerario y la manera de cómo actuar en este

periodo, cómo dar respuesta a esta situación excepcional de golpe silencioso y de rotura de orden constitucional. Defender las conquistas obtenidas en un momento que son cuestionadas por el sistema es importante pero proteger, regenerar y hacer que crezcan los sujetos colectivos que las hicieron posibles es indispensable.

En 1986, del esfuerzo generoso de organizaciones y partidos, surgió Izquierda Unida . Hoy, como entonces pasó, es el momento de recuperar el espíritu de la fundación de Izquierda Unida y lanzar la constitución de un Bloque Social y Político que pueda dar una respuesta unitaria a la nueva versión del capitalismo imperialista recogiendo las aspiraciones de las múltiples manifestaciones de rechazo al sistema, de las movilizaciones, de elementos concretos de cada una de ellas para elevarlas en una alternativa global al sistema social.

Como declaraba nuestra reciente X Asamblea Federal nuestro único objetivo es centrarnos en la coyuntura extraordinaria que vivimos (el golpe de estado silencioso) y acordar una acción común: la resistencia, organizar la rebelión democrática y la alternativa al capitalismo en su actual fase neoliberal y a las fuerzas políticas y sociales que les apoyan y, finalmente, hacer de Izquierda Unida una organización de masas para un proyecto de mayoría social.

# **TESIS I. CONTEXTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN POLÍTICA.**

## **II. I. 1. Crisis sistémica, crisis del régimen.**

La crisis actual, si bien la denominamos, crisis del capitalismo, no lo es tal, sino que más bien es el choque entre neoliberalismo y el actual modelo de Estado al que se le pretende desvestir de toda capacidad de control y salvaguarda de los intereses de la mayoría. Un neoliberalismo que impone un modelo de desarrollo que se centra en la búsqueda individual del máximo beneficio por unos pocos sin atender a los efectos que esto produce en el conjunto de la economía y la sociedad.

Un modelo capitalista que es capaz de desplazar a la economía productiva por una economía especulativa, aunque ello haga inviable la propia supervivencia del territorio y de las personas que viven en él. Un modelo que se caracteriza por la ausencia de control por parte de los Estados, buscando así su programa de máximos, respecto a los sectores estratégicos de la economía, tales como el sector financiero, el de los recursos naturales y del sector energético; y que pretende la dependencia de los gobiernos nacionales de las instituciones supranacionales no democráticas encumbrando al mercado como árbitro decisorio y definitorio de las políticas a aplicar y todo ello sin participación real en la toma de decisiones por parte de la ciudadanía.

Un modelo cuyos ataques surgen del corazón mismo de la economía (con una nueva crisis de superproducción y acumulación que intenta solventarse primero con burbujas y ahora con recortes) que tienen también una fuerte trascendencia política, pues vienen a cuestionar los principios básicos de nuestro estado social y democrático de derecho como la garantía del bienestar, la igualdad y la justicia para todas las personas con una separación de poderes y unos derechos sociales básicos que amortiguaran los efectos del sistema capitalista, y sus propias instituciones e incluso la representatividad formal en la que se basa. En estos momentos el capitalismo ni tan siquiera busca revestirse de esa capa de legitimidad, y muestra ya no que sea incapaz de satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de la población, puesto que esto es así desde su inicio, sino que el hecho diferencial es que ahora cada vez con menos pudor, lo hace admitiendo que ese no es su objetivo, adoptando por ejemplo rescates al sector financiero y vinculándolo directamente con la política de recortes.

Es por tanto la opción manifiesta y visible por favorecer a la banca frente a la ciudadanía, la que deja a la vista un Gobierno falto de soberanía, sometido y dirigido en lo económico por las instituciones y mercados europeos. Junto a lo anterior, el Gobierno del Partido Popular trata de introducir en la legislación cuestiones de índole ideológica, tal y como la reforma de la educación o la modificación de la regulación de la interrupción involuntaria del embarazo, que suponen una involución social y política que tendría que despertar el mayoritario rechazo de la ciudadanía o al menos un sector importante de la misma.

El cuestionamiento del sistema lleva al cuestionamiento de las instituciones y de la clase política, en especial de quienes se han plegado a los poderes económicos y a los recortes de derechos a la mayoría. Estamos pues ante el cuestionamiento del modelo representativo que ante la estabilidad política pretendida muestra la perversidad de primar mayorías frente a la pluralidad. El bipartidismo es una herramienta diseñada por el sistema capitalista para perpetuarse en el poder y evitar así una posible alternativa política al sistema, llegado el momento de una profunda crisis estructural del mismo, como sucede actualmente. Este contexto convierte en extraordinariamente difícil nuestra labor en las instituciones. Corremos el riesgo de que nos metan a todos en el mismo saco. De hecho, la derecha mediática es el mensaje que pretende lanzar a la sociedad con la corrupción, "lo que hace el PP, lo hacen todos", etc. no basta con ser consciente de lo distintos que somos comparándonos con el resto de formaciones, hace falta que lo demostremos en lo cotidiano. No solo en las palabras, en los hechos, en todo lo que dependa de nosotros debemos ser ejemplares y confrontar nuestras actitudes con las de los demás. En este contexto los representantes de IU en las instituciones deben ser especialmente cuidadosos en sus actuaciones para evitar puedan extender a nuestra organización y representantes la deslegitimación que los medios de comunicación del régimen intentan lanzar contra los que defendemos políticas anti régimen en las instituciones.

Pero para quebrar este modelo y fragmentar su poder electoral no es suficiente el desencanto sufrido por esas opciones mayoritarias y la pérdida de apoyo electoral de las mismas (puesto que mucho de ese apoyo va a parar a la abstención) sino que se necesita la concurrencia de bloques de izquierdas de manera unificada, tal y como se ha demostrado allí donde han surgido logrando subvertir los resultados y crear mayorías más plurales. En los casos en que hemos sido capaces de presentar alternativas unitarias, creíbles y con una propuesta anticapitalista, como AGE en Galicia, se produjo un gran avance de la izquierda alternativa. Además, cada vez se hace más urgente la modificación de la Ley hoy en día destinada a limitar al

máximo la actividad de las fuerzas que están a la izquierda de la socialdemocracia.

En estos momentos vivimos una verdadera contrarreforma constitucional que paradójicamente ha sido puesta en marcha por aquellos que defendían la imposibilidad de reformar la Carta Magna por temor a la rotura del pacto y los acuerdos constitucionales base de nuestra democracia. Una contrarreforma que se inició con la modificación del art.135 de la Constitución que supuso una ruptura radical de las reglas políticas existentes.

Los principios básicos de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho consistentes en garantizar el bienestar, la igualdad y la justicia a todas las personas, con una separación de poderes y unos derechos sociales básicos que amortiguaran los efectos del sistema capitalista hoy en día han saltado por los aires.

Hoy vemos como se recortan derechos fundamentales, se persigue y criminaliza la contestación, se modifica el Código Penal introduciendo límites a los derechos políticos básicos como el derecho de reunión o de manifestación, se acaba con la independencia judicial. Hoy se cuestionan derechos sociales básicos como la sanidad universal, la justicia, la educación o el derecho a la negociación colectiva. Hoy se cercena nuestro sistema democrático mediante un gobierno por Decreto, se limita la expresión democrática más básica, los ayuntamientos, mediante su intervención efectiva y se cuestionan los mecanismos de participación organizada de trabajadores, los sindicatos y el tejido social básico.

En este marco la opción de constituir un proyecto de mayoría social se torna realista si, en aquellos supuestos como nuestra Comunidad Autónoma, somos capaces de mantener capacidad de diálogo y convergencia con fuerzas políticas del marco de la izquierda (se constituyan o no en partidos)

## **I. 2. El marco político en Aragón.**

Izquierda Unida ha aumentado su representación en las principales instituciones de la Comunidad, siendo especialmente significativo este aumento en el ámbito municipal. Esto se ha debido en parte al trabajo realizado en los grupos institucionales y su capacidad de generación de alianzas estratégicas con el tejido social y el encuentro con la ciudadanía más organizada. El aumento de nuestra organización interna, de las alianzas con las redes sociales y de la capacidad de incidir en la realidad aportando nuestras propuestas ante los problemas de la gente nos están permitiendo avanzar en la cobertura de aquellas zonas blancas donde no teníamos referencias (salvando la gran dispersión existente en el ámbito rural y las dificultades en los núcleos más pequeños.)

Respecto al resto de fuerzas, debemos destacar que el panorama político aragonés no es diferente respecto a la crisis generalizada del bipartidismo. El PP Aragonés, menos cuestionado de partida que el de otras comunidades por su ausencia de gobierno en el periodo anterior, tiene unos niveles de descrédito similares y la desafección provocada por los recortes, especialmente severos en el ámbito social, le afecta gravemente.

De la misma manera el PP aragonés se ve afectado por la sospecha de corrupción generalizada de todo el partido derivada del caso Barcenás. Además de esto, el PP aragonés, al igual que los del resto de las comunidades, pierde la confianza de los que le votaron por su incapacidad y negación para liderar una salida a la crisis desde las instituciones, buscando como única solución el descenso de gasto.

Por otra parte nos encontramos con un PAR que se sitúa en mínimos históricos, sobre todo en el voto urbano y especialmente en Zaragoza. Los más de tres décadas pactando de forma oportunista, con unos y otros (PSOE y PP) y los escándalos de corrupción atesorados especialmente el de la Muela, le restan credibilidad con un discurso de derechas con escasos elementos regionalistas

La crisis del PSOE aragonés, es la misma que la del resto del Estado y en general es la crisis de las propuestas socialiberales que aplicó el Gobierno Zapatero mediante un programa de recortes que lo alejaba de su propia base social. Esta deriva hacia posiciones de derecha fue duramente castigada en las urnas con la pérdida del Gobierno lo que sin embargo no acabó con sus problemas, es más estos parecen haberse agravado. Existen numerosos motivos, el pasado de su dirección, la falta de autocrítica, una alternativa clara al sistema, los escándalos de corrupción, sus intentos de pacto con el PP y en Aragón, la alianza perpetua con el PAR, la apuesta

por modelos de desarrollo insostenibles (Gran Scala, Aramón...)... Una crisis que sin duda nos posibilita ofrecer a los votantes del partido socialista una alternativa diferente, desde la izquierda, haciendo otro tipo de política.

Hemos avanzado positivamente en las relaciones con CHA, por fin hemos entrado en una época de colaboración abierta con esta organización. Es evidente que ni somos lo mismo ni lo pretendemos, pero también que podemos confluir en múltiples cuestiones, de ámbito general o cotidianas. En cualquier caso en función del contexto este tipo de organizaciones priorizan más lo nacional o lo social. Todo parece indicar que por lo menos en Aragón la cuestión nacional pasa a un plano secundario respecto a los recortes sociales. La obtención de un diputado, gracias al impulso de la iniciativa social, y al acuerdo de las dos organizaciones ha supuesto un avance en lo institucional, y en la relación entre las dos organizaciones. Ahora debemos confluir en la movilización para profundizar los lazos comunes. Incluso aunque CHA planteara un distanciamiento con nosotros, nuestra política debe ser de mano tendida. Como hemos explicado siempre, la mayor diferencia entre las dos organizaciones son el carácter nacionalista, en lo ideológico, y regional, en lo organizativo, de CHA, frente al internacionalista y federalista, respectivamente, de nuestra organización. No se trata de obviar esta diferencia, sino de aprender a convivir con ella siempre que sea posible, sobre todo en la movilización. No acaban las diferencias con la cuestión nacional, pero donde podamos coincidir debemos intentarlo de forma sincera.

UPyD está empezando a ser un referente, para un sector de la población, y hará su aparición en las instituciones aragonesas en un futuro cercano y ello a pesar de que en Aragón no tienen ningún tipo de presencia pública o social, sin personas representativas al frente o estructura orgánica que los soporte. Aunque una formación como UPyD recibe votos de muchos lugares, las encuestas apuntan a que podría recoger una buena parte del descontento del PP. En cualquier caso es difícil concretar su futuro, pero nada tenemos que ver con esta organización, que desde el principio marcó distancias con cualquier posición mínimamente progresista.

## **TESIS II. LA PROPUESTA DE IZQUIERDA UNIDA. UN NUEVO MODELO SOCIAL Y DE ESTADO.**

### **II. 1. La superación del sistema.**

El actual sistema es incapaz de garantizar condiciones de vida dignas, de defender los intereses colectivos frente a las élites económicas y al Estado Social y Democrático de Derecho frente a la dictadura desreguladora de los mercados. En este marco, la apuesta política de Izquierda Unida de construcción de un sistema alternativo al capitalismo pasa por la ruptura de una de sus principales instrumentos el bipartidismo, siendo conscientes de la oportunidad planteada por la debilidad actual de ese bipartidismo.

En este objetivo, es clave la superación de las dependencias históricas en lo electoral del Partido Socialista por las cuales la derecha en el gobierno les suponía una automática recuperación y con ello una bajada electoral de Izquierda Unida de la que absorbían apoyos en concepto del mal llamado "voto útil". Hoy esa regla parece rota y la bajada electoral de uno y otro y la consiguiente subida de Izquierda Unida nos hace ser optimistas en la creación de ese proyecto de mayoría social. La consecución del diputado por Zaragoza por la izquierda de Aragón por la unión de Izquierda Unida-cha-iniciativa social nos llevan a pensar que la suma no es antagónica que es posible obtener resultados con procesos de convergencia. En cualquier caso debemos aprender de la experiencia de confluencia en la que se dieron elementos positivos como la obtención de un diputado y negativos como el hecho de que se tratara de una estrategia coyuntural con diferente grado de realidad en el resto del territorio. Por tanto la construcción de un bloque social y político alternativo debe construirse y reforzarse con el encuentro paulatino de la base, con una implantación territorial cierta y una articulación conjunta de un discurso elaborado desde postulados políticos de afinidad y de encuentro. En cualquier caso, Izquierda Unida de Aragón considera que la alianza con otras fuerzas políticas y sociales tiene un carácter estratégico y por lo tanto, además de valorarla positivamente, debe mantener y profundizar de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales los procesos de confluencia electoral que ya ha iniciado.

No obviamos ni negamos las dificultades que entraña este proceso de relación con "otros". Si bien son evidentes los frutos conquistados queda mucho por hacer. Izquierda Unida aborda estos procesos desde la honestidad, desde el reconocimiento al otro y la firme voluntad de respeto y encuentro, algo que exige superar la lógica de las concepciones clásicas de pactos y acuerdos que se sustancian netamente en una suma de siglas y no en la generación de referentes amplios y transformadores.

Las coincidencias programáticas son el eje central de estos espacios que reclaman también otras formas de hacer política común. Allí en la propuesta y la forma estamos convencidos que radica el éxito de acuerdos sinceros entre la izquierda. Izquierda Unida de Aragón considera una prioridad la conformación de un frente común de la izquierda aragonesa que supere la mera coalición de siglas y partidos para conformar una nueva propuesta social, política y electoral con el objetivo de constituir una mayoría alternativa a la derecha que hoy gobierna la mayoría de las instituciones aragonesas. Debemos observar bien el momento y generar las posibilidades de acuerdo con otras fuerzas de la izquierda alternativa, con o sin representación institucional, a la par que vamos caminando en la conformación de ese Bloque Social y Político en una clara alianza con los movimientos sociales organizados, en busca de crear una alianza para perfilar un modelo social alternativo.

En este sentido es como debemos entender experiencias como la Iniciativa Social, el incipiente proyecto C·3, estructuras como Mesas de Convergencia, Frente Cívico Somos Mayoría o Ateneo o cualquier otra que pueda surgir y que busque esa confluencia social y política en la que IZQUIERDA UNIDA se inscriba como un elemento imprescindible aunque no suficiente por sí mismo. En cualquier caso, debemos reflexionar sobre la proliferación de iniciativas que con un objetivo coincidente al de Izquierda Unida transitan en ocasiones por caminos paralelos. Es preciso articular junto con esos movimientos un programa alternativo y superador del actual modelo neoliberal, en una dinámica de movilización sostenida en el tiempo, que cohesione y que sea capaz de concitar la unidad de acción, evitando la dispersión de esfuerzos y buscando la contundencia en la respuesta. El Bloque Social y Político debe ser la amalgama de todos los sectores sociales afectados por los recortes y los ataques de los mercados. Un Bloque Social con una intención de cambio, que plantee una alternativa desde la base, desde la movilización y el conflicto concreto y diario y no sólo un puntual acuerdo de candidatura electoral.

## **II. 2. Servicios públicos.**

El fin de ciclo del capitalismo español hace que la búsqueda de beneficios se haga a través de ajustes salariales y recortes sociales y de servicios públicos. Esto supone el desmantelamiento paulatino del estado de bienestar surgido del pacto social generado tras la II Guerra Mundial en Europa occidental, cuando el capitalismo tuvo que hacer concesiones a la lucha organizada de la clase trabajadora y los sectores populares en un momento en que la Revolución era una amenaza posible a los intereses de la clase dominante (al existir el referente -simbólico al menos- de la URSS).

Por otro lado, la crisis económica está generando una fractura social aumentando los niveles de paro, exclusión y pobreza hasta límites insospechados. Lo que hace más necesarios que nunca unos servicios públicos capaces de garantizar los derechos básicos para el desarrollo de una vida digna. En el caso de Aragón, unos servicios públicos que también garanticen una vertebración del territorio.

Por el contrario, en vez de dotar a los servicios públicos de los recursos necesarios al nivel de las necesidades sociales en aumento, padecemos su desmantelamiento paulatino a través de privatizaciones, recortes, externalizaciones y aumento de tasas, que rompen con el principio de universalidad y gratuidad de estos servicios transformándolos en privilegios y negocio de unos pocos. Las políticas de austeridad de este Gobierno eliminan servicios públicos esenciales, donde trabajan muchas mujeres. Así, es la reducción de los derechos relacionados con la educación, con la salud, con la atención a la dependencia y muchos más lo que hace que las mujeres se queden en desempleo y además, que tengan más dificultades para la conciliación.

Mediante el discurso de la supuesta insostenibilidad y naturaleza derrochadora de la gestión pública, frente a la supuesta eficiencia de la gestión privada, tratan de generar un consenso social que no oponga resistencia a esta estrategia del neoliberalismo español que pretende hacer de los derechos fundamentales nuevos nichos de negocio a través de los que sostener sus tasas de ganancia. Las diferentes expresiones de la derecha (política, económica, social y mediática) están creando con la intención de desmantelar el sistema público para su consiguiente privatización, la idea de que "los recortes son absolutamente necesarios" y de que "no se desmantela lo público, sino que se complementa con lo privado, pero al ciudadano no le debe de importar mientras el servicio se le preste gratuitamente. Lamentablemente este mensaje está calando en la población y con él abriéndose la brecha entre el ciudadano y su vinculación al estado como garante de igualdad

y justicia social.

Por todas estas razones defendemos la prioridad absoluta del gasto público en pensiones, desempleo y servicios públicos esenciales frente a cualquier otro compromiso. La sostenibilidad de todos estos servicios a largo plazo pasa, en primer lugar, por la eliminación del redactado del Art. 135, apoyado tanto por el PSOE como por el PP, y en segundo lugar por un nuevo proceso constituyente realmente democrático.

Este es el punto de partida para la lucha que hoy aglutina la contestación social frente al ataque a los servicios públicos, a los derechos sociales, a la soberanía popular y a la democracia en general. La evolución de esta respuesta ciudadana, desde el 15M hasta hoy, constata esta necesidad de convergencia y unidad en lo político y en lo social. De ahí que reconozcamos esta reivindicación como el elemento de cohesión para articular el bloque social que ha de parar el golpe de estado financiero desde diferentes ámbitos: educación, sanidad, justicia, vivienda, servicios sociales, etc. La transformación vital y necesaria de movimientos surgidos de la indignación, como el 15M, está sembrando la semilla para la confluencia de las distintas expresiones sociales: ya sean de ámbito sectorial, como las mareas que son protagonistas de la defensa de los servicios públicos y la denuncia de los recortes que nos impone el régimen bipartidista; de ámbito transversal, como la lucha de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Stop Desahucios, que defienden derechos universales y constitucionales como el derecho a la vivienda; y de otros ámbitos como sindicatos, plataformas solidarias y asociaciones vecinales, asambleas de barrio nacidas del 15M y otros colectivos que tienen como elemento común el rechazo a este status quo impuesto desde entidades ajenas a cualquier elemento democrático como el Banco Central Europeo (BCE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea (CE). Las herramientas estratégicas que deben articular a estos movimientos contra el golpe de estado financiero, como punto de partida, deben ser: la Auditoría Ciudadana de la Deuda en lo económico, a fin de rechazar la socialización de las pérdidas de la especulación bancaria liberando estos recursos -que hoy van destinados a la deuda- hacia políticas sociales; y el Proceso Constituyente en lo político, devolviendo al pueblo la soberanía que le han hurtado para que pueda establecer qué modelo de sociedad quiere construir. Un nuevo modelo que nosotros y nosotras enmarcamos en la III República con democracia participativa. En definitiva, como movimiento social, Izquierda Unida debe participar en la confluencia de fuerzas organizadas que conformen una mayoría social en la defensa de la naturaleza pública y universal que debe primar en la provisión de los derechos sociales y los servicios públicos;

así mismo, debemos promover la cooperación para la conformación de una fuerza unitaria que tenga como razón de ser la lucha anticapitalista y la construcción de un sistema donde seamos "seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.

## **II. 2. 1. Estado del bienestar, servicios públicos y protección social.**

Nuestro insuficiente Estado de Bienestar es ahora objeto de un demoledor ataque que pretende acabar con él. Si en los últimos años las querencias privatizadoras de los anteriores gobiernos del PSOE y del PP, tanto estatales como autonómicos, habían colocado mediante distintas fórmulas numerosos servicios en manos privadas, ahora, bajo el pretexto de la crisis, se pretende dar un golpe que puede resultar definitivo, pues está transformando la concepción del propio servicio público como garante de los derechos.

Se pretende imponer un cambio estructural en la prestación de servicios públicos, convirtiendo a la ciudadanía en clientes y rompiendo la columna vertebral del Estado social: su universalidad. Pasamos de derechos universales a derechos selectivos. Sirve de ejemplo la ruptura de la universalidad de la Sanidad, que es ya un hecho con la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes en situación irregular o a jóvenes que no han cotizado. Las consecuencias de medidas como éstas, son dramáticas.

El capitalismo, en su afán depredador, persigue ahora lo que pueda quedar del sector público para hacer negocio. La sanidad pública representa un sustancioso negocio para las empresas privadas, y en nuestra Comunidad Autónoma ya tenemos ejemplos claros, como el de la centralización de los análisis clínicos para su gestión privada, la privatización del banco de sangre y de tejidos, y los despidos en el personal contratado.

El incremento del paro, la precariedad laboral, la caída de los salarios, sitúan a millones de ciudadanos y ciudadanas bajo el umbral de pobreza. A ello suman los recortes en educación, sanidad, atención a la dependencia, política social inclusiva, etc. que conllevan un mayor nivel de desprotección social y de exclusión, amén de más destrucción de empleo. La Reforma de las Pensiones del año 2011 con su ampliación del período de cálculo y el número de años de cotización requeridos agudiza la feminización de la pobreza entre la población de mayor edad ya que encontrarán mayores dificultades a la hora de sumar la cotización exigida para

obtener una pensión de jubilación digna.

Son las mismas medidas que sólo generan más desempleo y que recortan en política social inclusiva (por ejemplo Programa de Cualificación Profesional Inicial PCPI, talleres de empleo, escuelas taller, etc.) las que producen más situaciones límite y más transformación de la política social hacia la beneficencia, que por su parte, tampoco llega a atender de manera suficiente a la población. Un ejemplo claro ha estado en el recorte de las becas de comedor.

En nuestras ciudades y municipios se deja, en buena medida, en manos de las entidades benéficas (muchas en manos de confesiones religiosas con un trasfondo asistencialista) la tarea de paliar los efectos de la crisis y de estas políticas, las instituciones reaccionan tarde, no hay dotaciones presupuestarias suficientes y la realidad viene a superar la previsión económica.

Un elemento importante que también pone en riesgo a los servicios públicos, es la pretendida reforma de la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Haciendas Locales, que apunta, bajo la excusa de reducción del déficit, a la privatización o la eliminación de muchos de los servicios que los ayuntamientos y las comarcas están desarrollando, en vez de solucionar la reiterada bajada de fondos económicos que año tras año sufren los ayuntamientos, la entidad local más cercana al ciudadano y por consiguiente la primera en detectar de manera temprana las necesidades de la ciudadanía y en muchos casos en dar respuesta a los problemas reales..

El tercer sector, que atiende distintos ámbitos de los servicios sociales no cubiertos de manera directa desde la propia administración, también sufre una reducción radical de los recursos económicos destinados a ellos. Con ello se ponen en riesgo numerosos programas sociales necesarios para jóvenes, mayores, dependientes, personas con diversidad funcional, etc.

La política de recortes no pretende sólo reducir el déficit público a costa de empobrecer y desproteger a la ciudadanía. Forma parte también de la estrategia de debilitar y socavar la calidad de los propios servicios públicos, para así favorecer su desarrollo desde lo privado, propiciando que aquellas personas con mayor capacidad económica recurran a éste. Así se va configurando un sistema dual en los servicios públicos, en el que a lo público se le asigna el papel de la subsidiariedad.

Junto a la ofensiva privatizadora y de recortes, de fundamento neoliberal, se articula la ofensiva ultraconservadora, bien plasmada en el planteamiento educativo elitista

de la ley Wert, acompañada de severos recortes en educación o en las reformas de Ruíz Gallardón.

De esa ofensiva ultraconservadora, son objetivo prioritario las mujeres. Es claro el retroceso a décadas atrás en la concepción del papel de la mujer en la sociedad, plasmado en el soslayo y menosprecio de las políticas contra la violencia machista, en la pretendida reforma de la ley del aborto, en los recortes a una todavía muy incipiente atención a la dependencia, y en escuelas infantiles, se pretende que vuelva a ser la mujer quien atienda, quedándose en casa, las situaciones que el descompuesto estado de bienestar abandona.

Del mismo modo, la juventud es otro de los colectivos especialmente golpeados por la crisis y la política de recortes neoliberal, con más de un 50% de paro, y la situación de muchos jóvenes que se ven obligados al exilio económico. Además el acceso a una vivienda a los jóvenes está prácticamente vedada y la edad media de emancipación se sitúa en los 30 años. Por otro lado, la subida de tasas y la dificultad para acceder a una beca están propiciando la expulsión de la educación universitaria de numerosas personas. En el dudoso caso de acceder a un trabajo, este se ve sujeto a la precariedad y a un alto grado de rotación. La ausencia de seguridad en el empleo impide cualquier plan de futuro que permita a la juventud crear cualquier tipo de proyecto vital mientras exista el presente estado de las cosas en este país. Por tanto, los y las jóvenes deben ser actores protagonistas en el momento actual dentro de los procesos de transformación de los que es partícipe IU.

En definitiva, la embestida neoliberal y ultraconservadora que sufrimos, está dando lugar a unos servicios públicos, que, si nadie lo impide, dejarán de ser garantes de derechos, de acceso en igualdad a los recursos de la sociedad, que ya no podrán siquiera aspirar a su universalidad y que serán únicamente subsidiarios, para atender de manera precaria las situaciones más acuciantes, bajo una concepción no de cumplimiento de derechos sino de mera beneficencia.

## II. 2. 2. Los servicios públicos en el nuevo modelo de desarrollo.

El objetivo esencial del nuevo modelo productivo es garantizar el bienestar de las personas, sus posibilidades de realización individual y social, y su participación en la toma de decisiones de la colectividad. Para ello, la idea de que cada derecho esté garantizado por un servicio público que lo haga efectivo e igual para todos, es pilar fundamental.

En nuestra propuesta, queremos mejorar los servicios públicos en el sentido de aumentar la capacidad democrática de intervenir en la realidad para transformarla, como ofensiva a la propuesta neoliberal de desgazar el Estado. Esto significa asegurar el derecho universal y gratuito a la salud, la educación, el cuidado de la infancia, la atención a las personas dependientes, el deporte, la cultura... y, también, alcanzar la socialización de otros espacios como la banca, la energía y otros sectores estratégicos de producción. En Aragón este debate debe complementarse con infraestructuras básicas que permitan la vertebración del territorio como es el caso de la N232 (desdoblamiento o rescate de la APII en su caso).

Para defender los servicios públicos frente a la privatización tenemos que basarnos en un principio de responsabilidad en la gestión, además de su eficacia social, deben ser gestionados de forma eficiente, tanto a nivel general como en materia de recursos humanos, para evitar casos poco transparentes que deterioran la imagen de la política y de la función pública.

Queremos desarrollar legalmente la exigencia de cumplimiento de los derechos subjetivos: al trabajo, a la vivienda a salud, y a la educación. Reiteramos nuestro compromiso con la educación pública, laica y de calidad y defendemos que la educación es una inversión y no un gasto.

Desde Izquierda Unida proponemos eliminar toda participación privada en el sistema nacional de salud y que éste garantice la calidad del servicio en todas las CC.AA. Defendemos el Sistema Nacional de Salud en todo su carácter conquistado: público, universal, de calidad, integral, solidario y de equidad garantizada.

Defendemos el desarrollo de la ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, con recursos económicos, humanos y materiales suficientes, orientados fundamentalmente a la creación de una red de servicios públicos y no a prestaciones, aunque en ocasiones puedan tener un carácter subsidiario. Apostamos por una renta básica, y consideramos necesario abrir el debate en la sociedad en unos momentos donde el paro y la pobreza extrema se extienden entre amplias capas de la población. Una renta básica que permita la creación de ámbitos de autonomía y suponga la redistribución de la riqueza.

Frente a la ofensiva ultraconservadora, defendemos el feminismo como parte constitutiva de la democracia, de las relaciones de producción y personales, del modelo económico y de todos los ámbitos que conforman el entramado social. Erradicar la brecha salarial entre mujeres y hombres y establecer medidas contra

la segregación laboral y la precarización de los sectores laborales más feminizados, han de ser objetivos prioritarios desde una perspectiva económica, así como la incorporación de la mujer a la población activa asalariada, con medidas que la favorezcan y que ayuden a la creación de empleo (universalización y gratuidad de las escuelas infantiles públicas, extensión de los permisos de maternidad/paternidad y medidas de conciliación real de la vida familiar y laboral).

Defendemos el aborto libre y gratuito, y ello debe estar garantizado en nuestro sistema público de salud. No permitiremos ninguna involución en el derecho a decidir de las mujeres. Para consolidar una red de servicios públicos fuerte y eficiente, las ciudades y municipios tienen un papel fundamental. Es en su espacio donde el estado de bienestar debe reflejarse, en el que la educación, la sanidad, los servicios sociales deben prestarse con garantías de calidad e igualdad, con el objetivo de cohesionar la población y abordar los problemas de marginalidad y exclusión, desde la solidaridad.

Asimismo, ha de reconocerse la dispersión del medio rural para no verse discriminado en cuanto al alcance de todas estas políticas. Por ello, cualquier reforma de las Bases del Régimen Local, ha de pasar por una suficiente financiación a los municipios, y al contrario de lo que se está planteando desde el gobierno, por una cada vez mejor y mayor aproximación de los servicios públicos a las y los ciudadanos a través de los municipios.

## **II. 2. 3. Educación.**

En la actualidad, dado el ataque generalizado a los derechos básicos de la ciudadanía, acentuamos el nivel de nuestra protesta y el tono de nuestras reivindicaciones, sumándonos a los movimientos sociales y ciudadanos que legítimamente están reivindicando nuestro Derecho a la Educación.

Para Izquierda Unida el mejor modo de garantizar el ejercicio del derecho a la educación en condiciones de calidad e igualdad pasa por defender a ultranza un Servicio Público de enseñanza que, desde la educación infantil hasta la universitaria, esté al servicio de las necesidades sociales y laborales, de la igualdad de oportunidades y de los valores democráticos. La Escuela Pública es la única que puede garantizar el ejercicio de ese derecho en condiciones de igualdad y democracia.

Nuestra apuesta rotunda por el carácter público de la enseñanza es una apuesta por una educación pluralista y crítica, respetuosa con las diferencias a la vez que integradora de las mismas, gestionada democráticamente y compensadora de las desigualdades sociales. En este sentido aportamos por una Educación laica que respete la libertad de conciencia y elimine toda forma de adoctrinamiento del currículo escolar. Ello exige derogar los acuerdos con el Vaticano y cualquier otra religión, eliminar los conciertos con aquellos centros educativos con ideario religioso y exigir que la religión no se contemple como una asignatura en el horario lectivo, suprimiendo además cualquier simbología religiosa de los centros escolares.

Estos valores, auténticas señas de identidad de la enseñanza pública, debemos entenderlos y defenderlos a su vez como los indicadores efectivos de la calidad educativa.

### **1.- Hablamos de la Educación como Derecho Fundamental, y no solo como Servicio Público.**

La Educación, al igual que la Sanidad, la Vivienda o los Servicios Sociales, atienden a los Derechos Fundamentales de las personas. Nos oponemos y combatimos abiertamente las leyes y reformas educativas que como la LOU, la LOMLOU, el llamado Proceso de Bolonia, y el anteproyecto de la LOMCE conciben la Educación como un servicio y no como un derecho e impliquen la mercantilización de la propia Educación. Con esta denominación, se resta ese carácter de Universalidad a la Educación, que por Ley ha de ser asegurada por el Estado.

## **2.- Escuela inclusiva y democrática**

Debemos destacar la importancia de la creación de espacios de convivencia inclusiva y democrática en las escuelas, así como en los lugares donde se ofrece educación no formal; lugares donde las distintas capacidades, afectividades, orientación sexual, género, procedencia, cultura, etnia, etc. sean visibilizadas, valoradas y respetadas. Ello debe quedar de manifiesto en las programaciones oficiales y en la práctica del personal docente.

Asimismo, tanto los centros educativos como los espacios de educación no formal, deben ser lugares donde se aprendan y pongan en marcha prácticas de participación democrática, independientemente de la existencia o no de una asignatura a tal efecto, donde se den alternativas al modelo de relación con el otro desde la competitividad, planteando modelos de cooperación, trabajo en equipo y convivencia democrática. Si valoramos que la escuela debe ser democrática en su formación, desde luego debemos apostar por una escuela democrática en su funcionamiento, modificando las relaciones en los Claustros.

## **3.- Educación temprana**

Defendemos que la educación pública debe atender al desarrollo integral de las personas, por lo que desde edades tempranas debe proveerse por las instituciones autonómicas una Red Pública de Escuelas de calidad accesible para todas las personas, independientemente de su renta. Por eso, nos oponemos frontalmente a la política de ahogamiento de las Escuelas Infantiles municipales 0-3 años, que está practicando el gobierno PP-PAR.

La educación de 0 a 3 años no debe tener un carácter asistencial, sino que debe atender a los aspectos fundamentales del desarrollo integral de la persona que tienen lugar en este periodo de la vida.

La atención educativa temprana debe ir ligada, además, al compromiso político de que las madres y los padres puedan optar, en condiciones de igualdad y seguridad, a la atención y educación de sus hijos e hijas, adaptando para ello sus condiciones laborales a las necesidades de estos, y no al contrario.

## **4.-Educación especial**

Apostamos por una educación inclusiva para todas aquellas personas que tengan alguna discapacidad. Decimos inclusión y no integración porque la primera implica el formar parte de una misma comunidad educativa sin sentirse diferente al resto. Apostamos pues, por la escolarización de niños y niñas con discapacidad en su centro ordinario de referencia proporcionándole los medios humanos y materiales que necesite para su buen rendimiento académico. De esta inclusión, se beneficia tanto el alumnado directamente implicado como el resto, aprovechando esa

oportunidad para aprender a aceptar positivamente las diferencias. Esta opción educativa no tiene que entenderse como un entretenimiento para “los pobres discapacitados o minusválidos”. Desterremos de una vez estas palabras propias de otras épocas pasadas y pensemos que la educación inclusiva ha de ser por y para personas que quieren sentirse iguales e incluidas.

## **5.- La Escuela Rural**

El documento que salió de la X Asamblea de Izquierda Unida de Aragón afirmaba que “ha de reconocerse la dispersión del medio rural para que no sea discriminado”; a lo que tenemos que añadir que debe darse respuesta a los Derechos Fundamentales de las personas que viven en el mundo rural y dotarlos de los Servicios necesarios, cumpliendo los criterios de universalidad, accesibilidad, y calidad.

El medio rural ofrece opciones de vida que hemos de poner en valor especialmente, pues desde el punto de vista ecológico, de la salud y la convivencia, estas alternativas posibilitan condiciones más favorables para la sostenibilidad de la vida humana.

Bilingüismo para todas/os : La ampliación del bilingüismo a la escuela privada concertada puede conllevar una disminución del alumnado de la Escuela Pública, al perder uno de sus principales “atractivos” en ciertas zonas de Aragón. Supone además un incierto futuro de los profesores colaboradores y la manifiesta intención de la administración de ir prescindiendo de ellos a corto o medio plazo. Un bilingüismo sin el binomio profesor especialista/colaborador es evidente que no dispondrá de la misma calidad, riqueza lingüística y espontaneidad en el aula, que un modelo basado exclusivamente en profesores especialistas. Asimismo rechazamos la no obligatoriedad de la implantación del bilingüismo desde 1º de infantil para los centros bilingües, siendo una etapa fundamental en el aprendizaje de idiomas. La administración debe dotar de los recursos necesarios a todos los centros bilingües para que impartan en infantil el número de horas estipulado en la Orden del Gobierno de Aragón, y por tanto debe obligar a todos los centros a implantar el programa en Infantil. En aquellas zonas urbanas desfavorecidas, o medios rurales, el bilingüismo necesita un mayor esfuerzo económico.

## **6.- Un nuevo modelo educativo para una alternativa social y política.**

Necesitamos una nueva propuesta educativa que supere la mediocridad, la ambigüedad ideológica, y la agresividad neoliberal que los partidos mayoritarios han traído a la educación aragonesa.

Desde Izquierda Unida de Aragón no dudamos en que el camino está en la apuesta por el laicismo, por una red única de Centros Educativos Públicos suficientemente financiados, por una escuela gratuita, de calidad, inclusiva y democrática en todos los niveles.

Debemos revisar el modelo de enseñanza imperante, en el que se prima la competitividad y la independencia de las materias, clasificando los contenidos entre los de primera y segunda clase, en base a criterios puramente mercantiles. Es necesario que nos planteemos otros modelos de escuela donde se pueda dar cabida a proyectos de enseñanza desde una perspectiva holística.

Igualmente, el abandono escolar es un problema acuciante entre el alumnado. Por ello deberán apoyarse investigaciones que valoren los motivos reales del abandono y ofrezcan medidas resolutorias que vayan más allá de la segregación en programas alternativos, que cumplan en ocasiones más de espacios para prepararlos para el mundo laboral que en lugares para su desarrollo como personas.

Por una estructura educativa en la que, cada vez más, la Escuela Pública vaya asegurando y ampliando la oferta educativa, y esto solo será posible en la medida en la que los conciertos se reduzca hasta su desaparición. No debemos olvidar que el concierto de centros escolares debería ser una medida transitoria con finalidad de desaparecer, una vez que desde el sector público se pudiese garantizar a la totalidad de la población el acceso a una educación de calidad. Por supuesto, los centros privados que practican la segregación no podrán ser destinatarios de concierto educativo. Mientras todo este proceso llega, un aspecto necesario para asegurar la equidad en el sistema educativo es la distribución equilibrada del alumnado en desventaja entre los diferentes Centros escolares, aspecto que desde hace años se realiza de manera muy desequilibrada, en perjuicio de la Escuela Pública.

La educación debe colaborar al bienestar humano, fomentar la solidaridad, mejorar la productividad y reducir el consumo. Potenciar la formación profesional adaptando los planes de estudios a las necesidades reales de empleo y dotarla de los medios modernos y necesarios para su buen desarrollo

## **7.- Una apuesta clara y urgente por la Universidad Pública.**

La Universidad se encuentra asfixiada económicamente por drásticos recortes de fondos públicos (un 18% en los tres últimos años) que ha conllevado la precarización de profesorado y del resto de personal, con el hacinamiento de estudiantes, la subida de tasas y las dificultades para la movilidad estudiantil. Ante esto IU-ARAGÓN propone la dedicación de un 2% del PIB nominal de Aragón para financiar la Universidad Pública. Mantenimiento de la descentralización hacia los campus de Huesca y Teruel y un Plan de inversiones y el no apoyo de nuevos centros asociados o adscritos

Es necesario abordar las condiciones de contratación y la dedicación docente desde el compromiso con la Universidad Pública, incidiendo en medidas que aseguren la estabilidad de las plantillas y con criterios de dedicación docente que sigan los objetivos pedagógicos de mejora de la calidad. Apostamos por el asentamiento en condiciones de calidad del actual proceso de descentralización universitaria, en el marco del territorio aragonés.

Defendemos el establecimiento de mecanismos de participación democrática que garanticen la transparencia presupuestaria y el control del gasto en la Universidad de Zaragoza. Apostamos por mecanismos de acceso a los cuerpos docentes que garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, terminando con otros procedimientos que favorecen la endogamia.

Como garantía de la posibilidad de acceso en igualdad de condiciones a los estudios universitarios, exigimos un sistema de becas suficientemente dotado para llegar a todos y a todas las estudiantes que de ello precisan, en función de renta y contexto social en que se encuentren.

Exigimos también la anulación de las subidas de tasas universitarias impuestas desde 2009, así como su progresiva reducción llegando, en función de la renta, hasta alcanzar la gratuidad total.

Apoyar y fomentar los planes de investigación, eje fundamental para el desarrollo tecnológico de una sociedad avanzada.

Decimos no a la mercantilización de la educación. Siguiendo las directrices del Plan Bolonia la universidad pública abrió sus puertas a las empresas privadas, que utilizan las facultades y el estudiantado para hacer negocio: un ejemplo son las cátedras que diferentes empresas tienen en la Universidad de Zaragoza. Nos oponemos a esta mercantilización de la educación y reivindicamos una universidad al servicio de la sociedad, en la cual el objetivo no sea el beneficio de las multinacionales.

### **8.- El empleo público, garante la calidad educativa.**

En el contexto actual es necesaria una apuesta decidida por el empleo público, que asegura la igualdad entre los trabajadores y las trabajadoras y afianza la estabilidad de las plantillas, tanto en el medio urbano, como en el medio rural. Por ello es necesaria la implementación de medidas que refuercen la permanencia y el compromiso del profesorado en el medio rural, especialmente.

Apostamos por la no externalización de servicios, la lucha contra la precariedad laboral, porque asegurar unas condiciones de trabajo dignas de los trabajadores y las trabajadoras del ámbito educativo, desde lo público, contribuye de forma importante a la calidad de los servicios. Para ello, apostaremos por la necesidad de un plan real de formación permanente del profesorado, que sea obligatorio y de calidad demostrable.

### **9.- La financiación de la Escuela Pública es fundamental para su viabilidad.**

La política de fuertes recortes en la financiación de la educación, especialmente desmesurados en los dos últimos años, nos llevan a una situación de involución y de regreso a los años del franquismo, de pérdida de calidad del sistema, de ataque a la Escuela Pública, de despreocupación por los más necesitados, de abandono del ámbito rural a su suerte, de refuerzo decidido a la escuela privada, de privatización creciente de los escasos recursos que se destinan.

Los ataques a la financiación y a la calidad vienen también, a los programas de apoyo. Su presupuesto se ha visto reducido, cuando no eliminado. No podemos permitir que aquellos programas conducentes a la mejora de la formación global, a la inclusión y a la mejora de la calidad educativa, desaparezcan en detrimento de la calidad de la Escuela Pública.

Medidas que han motivado una fuerte oposición de los sindicatos del profesorado, de las organizaciones y asambleas estudiantiles, de las Asociaciones de madres y padres, de las Plataformas por la escuela pública, de la Marea Verde...; a los que Izquierda Unida se ha unido activamente, codo con codo, y que nos obliga a seguir manteniendo la movilización, hasta que consigamos revertir la ola neoliberal que ataca a los Servicios Públicos fundamentales.

## **II. 2. 4. Sanidad.**

Defendemos el Sistema Nacional de Salud en todo su carácter conquistado: público, universal, de calidad, integral, solidario y de equidad garantizada, que cuente y cubra suficientemente y con las debidas garantías, las necesidades y los derechos del medio rural, evitando que éste quede discriminado. Defendemos su carácter público, sin híbridos mixtos, y rechazamos su privatización. La sanidad pública aragonesa corre serio peligro. Se está privatizando a través del Consorcio de Alta Resolución, así como con los conciertos con la sanidad privada para "enmascarar" las altas cifras de las listas de espera.

Exigimos para la sanidad pública unos presupuestos finalistas que cada autonomía a partir de un plan de necesidades y consensuado en el consejo interterritorial. debe ser ejecutado en su totalidad, es el caso en la Sanidad Pública de Aragón.

Rechazamos y pedimos la derogación del Real Decreto 20/12 por el que la cobertura de atención está ligada al aseguramiento, perdiendo la universalidad de acceso y dando lugar a la exclusión del sistema sanitario a personas que no cumplen los requisitos.

La asistencia sanitaria, como parte del derecho a la salud, es un derecho universal e igualitario reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Aragón; la aprobación y aplicación del Real Decreto Ley supone una conculcación de los derechos sociales y sanitarios de la población inmigrante en España, y la vulneración del espíritu que conlleva la protección de los Derechos Humanos, el concepto constitucional de los derechos de los ciudadanos y el artículo 14 del Estatuto de Autonomía de Aragón. Proponemos, formando parte de la Plataforma Salud Universal, oponerse a la aplicación del mencionado Real Decreto y:

1. Paralizar en Aragón la aplicación del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, teniendo en cuenta lo que dice el Artículo 14 del Estatuto de Autonomía de Aragón, y continúe prestando asistencia sanitaria y prestación farmacéutica a la población inmigrante en situación irregular que vive en Aragón, en las mismas condiciones que a la población autóctona.

2. Crear, en tanto persista la aplicación del Real Decreto, una Comisión de Seguimiento (de la que formen parte, entre otras, las entidades sociales que trabajan directamente con personas inmigrantes), para evaluar la aplicación del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud en Aragón y sus consecuencias en los colectivos afectados.

Desde hace algún tiempo venimos escuchando por parte del Gobierno central, y con idéntico entusiasmo por el Gobierno de la señora Rudi, que la sanidad se encuentra en crisis, que si no se acometen las medidas necesarias la sanidad pública es insostenible. En consecuencia, dicen, se hace imprescindible acometer una serie de reformas que son la "única forma" de garantizar el sistema sanitario público.

La realidad es que nuestra Sanidad está sufriendo una agresión sin precedentes en España y en Aragón. Aragón es la segunda Comunidad, por detrás de Murcia, que menos invierte en Sanidad. La centralización/privatización de los laboratorios clínicos, la eliminación de turnos de tarde en los centros de salud, los recortes en la plantilla del Salud, las listas de espera duplicadas, la falta de recursos en el medio rural..., son algunas de las actuaciones que están marcando la hoja de ruta del gobierno del PP y el PAR. Una hoja de ruta que no tiene otro objetivo que la privatización de la sanidad en Aragón, tal y como ya está sucediendo en otras Comunidades. El modelo de los centros de alta resolución en el Aragón rural o la intención de cierre del CME Grande Covian son exponentes de estas políticas.

Se nos quiere hacer creer que lo público es ineficiente, poco competitivo, derrochador y que lo racional y eficiente es la gestión que hace la empresa privada. Pero la realidad es que tenemos una de las sanidades más eficientes del mundo, a pesar de que somos uno de los países que menos porcentaje de renta destina a su sistema público de salud: el 6,25% del PIB, y hasta la fecha se daba una cobertura universal con unos niveles de calidad muy superiores a la mayoría de países de nuestro entorno. Debemos fortalecer el discurso de que la sanidad pública es un servicio que garantiza derechos básicos, por lo tanto es lógico y normal que sea un servicio deficitario.

El dinero invertido en sanidad se rentabiliza en salud y bienestar social, no debería por lo tanto generar beneficios económicos. Es importante hacer llegar a la ciudadanía un mensaje claro de que el déficit no es un criterio válido para valorar la eficiencia de la sanidad pública. Esta claro que se debe hacer buen uso de los

recursos, evitar el derroche y mejorar la gestión siempre que se pueda, pero sin supeditar la calidad de los servicios públicos básicos a criterios economicistas.

En el momento de crisis actual, la sanidad se ha convertido en el nuevo becerro de oro; una vez agotada la burbuja inmobiliaria, se necesitan nuevos horizontes y las oportunidades de negocio relacionadas con la gestión privada de los servicios sanitarios públicos se han convertido en el nuevo objeto de deseo. Grupos como Capiro y Ribera Salud se reparten los procesos de privatización del sistema público sanitario.

Además, el copago sanitario representa, por un lado, una doble imposición ya que obliga a pagar por un servicio y/o producto por el que las y los ciudadanos ya hemos pagado vía impuestos; y, por otro lado, representa una barrera económica que afecta especialmente a las personas perceptoras de las rentas más bajas y a las personas con enfermedades crónicas. Además, los tramos de renta que determinan los porcentajes que debe financiar el Sistema Nacional de Salud son desiguales e injustos, siendo las rentas más bajas, de nuevo, las rentas más perjudicadas. Por otro lado el llamado "medicamentazo", entre otras medidas, es un ejemplo más de las políticas mercantilistas que rigen en el modelo de sanidad del gobierno del Partido Popular. La desfinanciación de más de 400 medicamentos ha favorecido que las empresas farmacéuticas aumenten hasta un 130% sus precios. Pese a que la mayoría de los medicamentos desfinanciados tratan síntomas menores, resultan indispensables en ciertos pacientes crónicos lo cual supone un elemento más de exclusión social.

Hay que potenciar la investigación farmacéutica desde la iniciativa pública frente al imperio de los grandes laboratorios. Deben destinarse fondos a las líneas de investigación no oficialistas, especialmente a las dirigidas a la sustitución de los tratamientos con productos agresivos para el medio ambiente. Exigimos mayor participación y control por parte del Estado en los protocolos, tratamientos y ensayos clínicos.

Apostamos y defendemos un sistema de sanitario que tenga como objetivo garantizar el bienestar de las personas y no el beneficio de sus inversores. El sistema de Salud pública, que alcance el 10% del PIB% ha de estar dotado de la financiación necesaria, para lo que es preciso cubrir el déficit existente con respecto al promedio de la UE-15. Sigue siendo necesario reforzar la atención primaria para que esta constituya el verdadero eje de la atención. Especial mención requiere el vital papel de la sanidad pública en el Aragón Rural, y la necesidad de garantizar unos servicios sanitarios de calidad y con capacidad de respuesta inmediata cuyo

futuro no esté regido por la aplicación de criterios demográficos y económicos que inevitablemente conllevarán el desmantelamiento de la sanidad rural.

La Atención Primaria debe ser el eje central de la atención sanitaria. Reclamamos un giro de la Atención Primaria hacia la promoción de la salud y la atención comunitaria. Reclamamos también una mayor conexión de la Atención Primaria con la especializada que daría lugar a una atención de mayor calidad y mejor gestionada.

Por otra parte, la salud laboral no debe encuadrarse fuera del ámbito público. Además exigimos una gestión eficaz y transparente de las listas de espera para evitar su externalización. Es necesario adecuar las plantillas del personal del SALUD a las necesidades reales del sistema: aumento de plazas, supresión de empleo precario y Oferta de empleo público, cubrir el déficit de profesionales del medio rural y en toda la red hospitalaria de Aragón.

Reclamamos la exclusividad de los profesionales sanitarios, a partir de médicos adjuntos. Son profesionales formados en el sistema público, son profesionales que se deben al sistema público por su formación, su atención sanitaria, investigación y por la obligatoriedad de su trabajo a la empresa que le paga. Por supuesto estamos en contra de la asistencia sanitaria prestada por profesionales que se benefician de la sanidad pública para pruebas e intervenciones derivadas desde la atención privada.

También reclamamos la optimización de los recursos sanitarios humanos y materiales, en número y gestión para la mejora de los resultados asistenciales. Es necesaria la atención por la tardes en centros de salud, centros de especialidades y hospitales. Favorezcan la atención personalizada en la Atención Primaria, y que den lugar a una menor lista de espera en los hospitales y centros de especialidades. Es decir queremos que los centros funcionen a pleno rendimiento.

Es necesaria la información de la cartera de servicios y la evaluación de los contratos programas a los órganos de participación. Por otra parte la cartera de servicios y los contratos programas deben ser consensuados con los profesionales y los usuarios.

Reclamamos un plan de choque contra las listas de espera evaluable y revisable por los profesionales y la ciudadanía.

IU reclama para una mejor gestión la unidad clínico-administrativa en el servicio en el que vaya dirigida la interconsulta, para un mejor control de las citas, mayor información a los/las pacientes, con posibilidad de contacto con ellos y con los médicos de Atención Primaria.

Reclamamos un sistema de información y de receta electrónica compatible en todo el estado español. Estamos en contra de sistemas informáticos incompatibles entre ellos. Estamos a favor en que los sistemas de información sean públicos. Reclamamos sistemas en los que al sanitario no se le niegue la información real en cualquier momento, necesaria para la buena atención sanitaria, mejor formación y mejor investigación. Lo contrario es privarnos de libertad.

La salud la construimos entre todos; tanto la salud individual como la colectiva. La salud pública, políticas sanitarias y el empoderamiento de los ciudadanos son esenciales para la mejora de la salud. Es necesaria una mayor participación de la ciudadanía. Es necesario que la participación comunitaria sea real. Es necesario un refuerzo de los consejos de salud de zona, en los que estén implicados en su funcionamiento tanto los profesionales como los representantes de asociaciones vecinales, de la junta de distrito, farmacéutico, veterinario, consumidores. Es necesario que estos consejos de salud se nutran de información y sean capaces de analizar y criticar los resultados en salud. Es importante que esos análisis e informes lleguen a la administración y las organizaciones representadas. Por otra parte IU está a favor del recién creado foro de presidentes de consejos de salud de zona en el que las informaciones de los consejos se analizan en conjunto y se puedan tomar decisiones en la que estén implicados todos los consejos de salud. Desarrollar un control de la industria farmacéutica y potenciar la elaboración y suministro de productos farmacéuticos genéricos.

La sanidad no está en crisis. El volumen de dinero que mueven las grandes empresas que se dedican a la gestión privada de la misma demuestra lo contrario. Lo que se está haciendo en España, y ahora claramente ya en Aragón, es abrir las puertas a hacer negocio con la salud, a especular con un derecho fundamental. Por ello, desde Izquierda Unida nos sumamos a las reivindicaciones protagonizadas por las y los profesionales del ámbito de la salud. Porque la salud no se vende y vamos a defenderla frente a quienes pretenden dinamitarla para mercantizarla.

## **II. 2. 5. Acción social.**

Los programas de acción social deben actuar como mecanismos de igualdad, de justicia, de cohesión y de promoción de la autonomía de las personas. En definitiva, estas políticas deben ser instrumentos a través de los cuales combatir las causas de la desigualdad para avanzar en un nuevo modelo de sociedad, complementado el resto de políticas públicas, como última red de protección social.

Estas políticas deben completar la garantía de derechos individuales y colectivos. Para ello se debe tener en cuenta tanto al individuo como el territorio que éste habita, el contexto. Para ello es necesario un enfoque comunitario en los programas de acción social. Se deben desarrollar medidas que dignifiquen a la persona y su condición activa. Las políticas sociales deben tener un enfoque integral de la persona, en el que se considere el global de la situación, y no se parcelen intervenciones en función de la "distribución burocrática" del sistema de servicios sociales.

Entendemos, por tanto, que los servicios sociales públicos y universales deben atender las necesidades sociales de la población pero también prevenir y eliminar las causas que conducen a la exclusión social, para no caer en una mera dimensión asistencial y paliativa.

Desde el estallido de la crisis económica. La magnitud de las desigualdades y las alarmantes cifras de pobreza han desbordado la capacidad de actuación de las administraciones. Esta circunstancia, unida a los constantes recortes en programas sociales, ha provocado que la respuesta que se está articulando sea más propia de la Beneficencia de siglos pasados. Se reduce la intervención desde lo público y las medidas desarrolladas están más caracterizadas por lo asistencial que por lo promocional.

Es necesario recuperar la profesionalización de los servicios ya que se produce la tendencia de reducir los requisitos de formación para la atención de las personas como es el caso de la Casa de acogida donde la DGA estipula auxiliares en vez de educadoras.

Izquierda Unida manifestarán su oposición frontal a cualquier tipo de medida social que se plantee, y que genere un atisbo de duda de que la respuesta a dar con esas medidas incluyen el asistencialismo o generan procesos de atención desde la beneficencia. Es la única manera de defender las políticas sociales como un derecho fundamental de la ciudadanía.

El PP en el Gobierno de Aragón ha realizado innumerables recortes en partidas de carácter social: becas de comedor, becas de libros, se está dilatando el proceso de aprobación del Ingreso Aragonés de Inserción, se ralentiza también la respuesta en solicitudes de Ayudas de Integración Familiar, se hace más difícil la protección de menores y la atención a colectivos en dificultades por el recorte y la reducción de servicios. Por otra parte se anuncian, desde el Gobierno de la Nación, recortes presupuestarios en el Plan Concertado que da cobertura a los municipios para la puesta en marcha de prestaciones básicas.

Las políticas de austeridad multiplican el desempleo, generalizan la pobreza y, además, están dinamitando la red última de apoyo con la que contaba la población que sufre la pobreza.

Otro de los hachazos del PP se refleja en la paralización de Ley de Dependencia, se están amortizando plazas concertadas en residencias, los procesos de resolución del grado de dependencia se retrasan, las prestaciones de tipo económico se reducen en unos casos y no llegan a concederse en otros y se retira la financiación de la seguridad social a los cuidadores familiares. El calendario que marcaba la progresiva implementación de estas medidas se ha paralizado.

Estos recortes suponen un duro golpe a la dignidad de las personas. Y este golpe, también se ha encontrado con la contestación social. La Marea Naranja como espacio de confluencia de las y los profesionales de los servicios sociales, y de los y las usuarios y usuarias está reclamando la responsabilidad que el Estado ha de tener en la cobertura de las necesidades básicas de la ciudadanía.

La contrarreforma que en el ámbito de lo social se está desarrollando, involuciona hacia programas caracterizados por componentes de graciabilidad frente a políticas que se traducen en derechos desde objetivos de justicia social. Para lograr estos objetivos es fundamental que las políticas sociales sean garantizadas desde lo público, estableciendo criterios en la prestación. Se debe considerar la calidad en la orientación de los servicios sociales hacia el ciudadano como en las condiciones laborales de quienes lo prestan.

Estos criterios deben estar presentes en aquellos ámbitos donde la prestación es directa pero también cuando la prestación se realiza a través de otras entidades. En estos casos, hay que circunscribir su actuación y establecer preferencias por aquellas entidades con una gran implicación comunitaria, cuya especificidad y

actuación aporte iniciativas precursoras en el ámbito social.

## **II. 2. 6. El derecho a una vivienda digna y la lucha contra los desahucios.**

El derecho a “una vivienda digna y adecuada” (art. 47 CE) está reconocido en la Constitución española, aunque nunca haya sido garantizado por los poderes públicos. Si alguna política social ha sido abandonada al mercado y al mercado especulativo, en particular, esa ha sido la de la vivienda. En cualquier caso el problema de la vivienda no puede tratarse de manera aislada de las condiciones generales de la ciudadanía puesto que, para un amplio sector de la sociedad, la primera dificultad para acceder a una vivienda reside en la falta de empleo, en su precariedad o en su salario.

La vivienda ha sido tratada en España como un bien de inversión e intercambio, gracias a los beneficios fiscales y a las expectativas de ganancia “porque el precio de la vivienda siempre sube”; y, en muchas ocasiones, como un instrumento de financiación de las administraciones públicas gracias a las políticas del suelo y a los diversos impuestos que han recaído tradicionalmente sobre las actividades relacionadas con la construcción y la compra y venta de viviendas.

La política de vivienda en España ha favorecido, desde siempre, pero particularmente desde el Franquismo y durante todo el período democrático, la vivienda en propiedad frente a la vivienda en alquiler. España, junto con la mayor parte de los países del Este Europeo, donde la reintroducción del capitalismo ha supuesto la venta masiva de las viviendas públicas de alquiler, tiene un parque de alquiler muy reducido y de pésima calidad y un parque de alquiler social puramente simbólico: 2,8% en España y 1,8% en Aragón (ECV, 2012) mientras en buena parte de los países de la UE la población que vive en alquiler protegido es superior al 15% (Eurostat, 2009).

El problema de la vivienda en España no es de escasez, sino de accesibilidad. Ahora con más evidencia que nunca está claro que ha sido un política equivocada, especulativa y criminal la que ha hipotecado de por vida (30 y hasta 40 años) a muchos ciudadanos, obligando a un sobrecoste a multitud de familias: el 82% de las viviendas en España son en propiedad (y el 80% en Aragón), pero algo más de un tercio de esas viviendas, tanto en España como en Aragón, cargan con una hipoteca.

Hipotecas que se han convertido en impagables para un número importante de familias, golpeadas por el desempleo y la pérdida de ingresos económicos: 349.438 (8.401 en Aragón) ejecuciones hipotecarias en España entre 2007 y 2011 (no siempre de viviendas, es una dato que se desconoce y que se ha reclamado reiteradamente) y 166.716 (4.845 sólo en la provincia de Zaragoza) desahucios desde 2008 hasta 2011, según los datos del Consejo General del Poder Judicial de 2012 (tampoco se sabe aquí cuántos son de viviendas en "propiedad" y cuántos de viviendas en alquiler, dato que también se ha reclamado reiteradamente).

Otro elemento a considerar y de difícil cuantificación, por otra parte, es el de las viviendas vacías. Desde el último dato fehaciente, el censo de población y vivienda de 2001, se supone que la situación no ha cambiado y, en torno a un 15% de la vivienda es segunda vivienda y otro tanto es vivienda vacía, un recurso que no debería estar ocioso impunemente. Para ello IU defenderá un gravamen altamente progresivo para las viviendas vacías, los porcentajes aumentaran en función del número de viviendas de sus poseedores, sean particulares o empresas. El objetivo de esta medida es hacer imposible la especulación con lo que resulta un derecho elemental. La creación de un Parque Público de Viviendas de alquiler debería contar con las viviendas integradas en la Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios procedentes de la reestructuración bancaria (SAREB), conocido como "Banco Malo.

Las políticas públicas deben comenzar con una política de suelo, evitando la especulación con el mismo y su uso como vía de financiación, utilizándolo como una herramienta para diseñar un modelo de ciudad sostenible, compacto, que posibilite un uso social del espacio público, con equipamientos y zonas verdes suficientes, poniéndolo al servicio de garantizar el acceso a una vivienda digna adecuada y asequible a las economías individuales y familiares que no deberían dedicar a la vivienda (rentas y servicios) más de un 25-30% de sus rentas. Eso sólo se puede lograr con unas potentes políticas de vivienda públicas de alquiler social, protegido. Se debería marcar un plazo de 10/15 años para lograr un parque de viviendas públicas de alquiler de un 10%, lo que significa multiplicar por tres el actual parque de vivienda

Izquierda Unida apuesta por las VPO de promoción pública, priorizando el alquiler, y por la rehabilitación de viviendas antiguas en los cascos consolidados de ciudades y pueblos son las tareas prioritarias en materia de vivienda. Por ocupar las viviendas vacías, establecer por ley que ninguna vivienda pueda permanecer desocupada sin causa y especialmente las que están en manos de entidades financieras, con el fin de su traslado al mercado de alquiler de las mismas. Por exigir que los bancos

que hayan recibido ayudas públicas para su rescate, pongan a disposición de la administración competente un parque de viviendas para uso social cuyo número de viviendas a poner en disposición será con relación a las ayudas recibidas. Establecer un precio máximo de alquiler. Izquierda Unida propone la rehabilitación de las viviendas antiguas. La inversión en rehabilitación de viviendas antiguas, particularmente en los cascos antiguos de las ciudades y, en general, en lo que llamamos la ciudad consolidada, incluidas las zonas rurales, favorecería la ocupación de recursos ociosos de la construcción, mejoraría las condiciones de vida de muchos ciudadanos y los saldos energéticos del parque y aumentaría la oferta de viviendas en alquiler.

El otro gran frente actual para garantizar hoy el derecho a la vivienda pasa por parar los desahucios de la vivienda habitual de aquellos individuos y familias que, como resultado de la crisis económica (desempleo, pérdida de prestaciones económicas, etc.), no puedan hacer frente al pago de sus hipotecas: paralización de los desahucios, dación en pago con carácter retroactivo incluyendo en casos justificados la devolución de una parte del dinero aportado en el pago de la hipoteca por parte del banco (incluidas las viviendas que hayan sido desahuciadas desde el comienzo de la crisis) y exigir el derecho a continuar viviendo en ellas acordando con los bancos unos alquileres asequibles para que las familias desahuciadas puedan seguir ocupando su vivienda, recuperando la función social de que una vivienda vacía garantice que una familia no se quede en la calle. Además IU, luchara por la despenalización de la ocupación en viviendas ociosas. Mientras existan personas sin techo, y techos sin personas, consideramos prioritario el derecho a vivir dignamente por encima del de propiedad.

Hay que valorar especialmente el surgimiento del movimiento Stop Desahucios como punta de lanza de los movimientos sociales que trabajan en el tema de la vivienda. Los rasgos que han caracterizado y caracterizan a Stop Desahucios son: la autoorganización de los propios afectados, la resistencia ante cada desahucio consiguiendo importantes victorias concretas, y la recogida de firmas para elaborar y presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Esta lucha ha conseguido una visibilidad y un apoyo social sin precedentes. Debemos aprender de las estrategias de este movimiento que ha conseguido que movimientos informales (15M, etc.) y tradicionales (sindicatos y partidos) trabajen juntos con un mismo objetivo.

## **II. 2. 7. Justicia.**

La credibilidad del sistema judicial está en tela de juicio. La falta de independencia del poder judicial, la utilización partidista de los órganos judiciales, la aptitud ante la recuperación de la Memoria Histórica y sobre todo la sensación mayoritaria entre amplias capas de la población de la existencia de una doble vara de medir, dependiendo de la clase social a la hora de los fallos judiciales, está provocando esta falta de credibilidad del sistema judicial.

Al igual que en el resto de servicios públicos, la justicia también sufre una serie de acusaciones de ineficacia; los epítetos más utilizados a la hora de calificar la justicia son: lenta e ineficaz. Con ello se trata de generar un estado de opinión para tratar de privatizar la Justicia, como se pretende hacer con el registro Civil entregándolo a los Registradores de la propiedad y mercantiles.

Los recortes también han llegado a la Justicia, limitando la creación de nuevos juzgados o la contratación de jueces, fiscales o interinos de refuerzo. Uno de los recortes que más específicamente perjudicarían a Aragón es la reducción del número de partidos judiciales, donde Aragón pasaría de 16 a 7 (casi un 60% menos), lo que supondría dificultar territorialmente el acceso a la justicia, especialmente en el mundo rural, y ahondaría en la desvertebración del territorio.

El aumento de las tasas judiciales en torno a 500-700 euros limita el acceso a la justicia en condiciones de igualdad a las personas con menos recursos. La gravedad es aún mayor pues vivimos unos momentos de aumento de despidos, desahucios, represión policial o abusos sobre consumidores y usuarios.

En definitiva, supondrá una impunidad mayor contra estos abusos, al verse limitadas las víctimas en el acceso a la justicia.

El acceso a la justicia en condiciones de igualdad supone la garantía efectiva de los derechos de la ciudadanía, por lo que Izquierda Unida apoya las movilizaciones emprendidas por los trabajadores de la Justicia en defensa de su puesto de trabajo y de una Justicia gratuita y universal. Nuestra propuesta pasa por la democratización de la Justicia como servicio público frente a los planes privatizadores, su transparencia y simplificación de trámites, una justicia gratuita que garantice el derecho a tutela judicial de todos los ciudadanos.

## **2. 8 Protección animal**

Defendemos la abolición inmediata de actividades contrarias a la protección animal como son las corridas de toros, los circos en los que se emplean animales, el sacrificio en perreras u otros centros de recogida, la utilización de cepos en los caballos... Además abogamos por las campañas de adopción y acogida, de esterilización en todas las especies en las que sea posible así como de la consideración de las ciudades y las comunidades autónomas como amigas de los animales. Defendemos que todos ellos son seres sintientes, y como tal, nuestra política debe ir orientada a protegerlos.

## **II. 3. Igualdad.**

No hay justicia ni democracia sin hombres y mujeres libres e iguales en derechos económicos, sociales, políticos y culturales. Y precisamente el momento histórico que hoy vivimos viene caracterizado por la pérdida de democracia y de justicia social. Se trata de un momento de ofensiva por parte de la derecha más recalcitrante, para la que las conquistas en materia de igualdad, derechos sexuales y reproductivos y libertad afectivo-sexual, están situados en el punto de mira, porque la negación de estos derechos representa una de las caras más visibles de su ideología.

El PP, tanto en el Gobierno de la nación como en el Gobierno de Aragón, ha eliminado de un plumazo el concepto de paridad e igualdad. Está transmitiendo el perfil femenino de cuidadora y esposa, frente al masculino dedicado al ámbito productivo. Están eliminando recursos de protección social fundamentales para las mujeres, reducen los programas para la igualdad, y niegan el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, vuelven a la carga con el aborto.

Otro tema que nos afecta directamente es que para conseguir esta reimplantación de los roles de género vuelven a problematizar cualquier condición sexual "no normal" y a retroceder en la libertad de las personas para decidir sobre sus cuerpos y vidas. La elección del nuevo Comité de Bioética de claro sesgo ultra conservador, la mayoría de sus miembros se ha declarado abiertamente contra la libertad para decidir de las mujeres, asesorara la prevista modificación de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, impulsada por el ministro de justicia en su línea de reformas marcadamente machistas, esto supone una agresión directa a las mujeres. Como también lo son, suprimir el término violencia de género del código penal, como si esto no existiera, o pretender dejar fuera de sanción penal a las vejaciones leves que son el salto cualitativo hacia la violencia de género. Pero también lo es, la reducción de presupuestos y servicios dirigidos a combatir

dicha violencia y el aumento de las tasas judiciales nos afecta directamente. Mantenemos que la ley de custodia compartida no tiene sentido cuando no ha habido corresponsabilidad previa en los cuidados y la crianza. Todavía esperamos leyes que realmente propicien la corresponsabilidad como la ampliación de los permisos para ellos y ellas.

Mientras tanto, el número de mujeres asesinadas por violencia de género sigue siendo una constante. Miles de mujeres son explotadas sexualmente ya sea como reclamo publicitario, o lo que es más grave: prostitutas. La prostitución es a menudo asumida socialmente como una actividad más, obviando la negativa carga ética que conlleva, así como las mafias, tráfico de personas, abusos de todo tipo y blanqueo de dinero que están asociados a esta práctica; todo esto requiere de políticas activas educativas para la sociedad en su conjunto, reinsertadoras para las mujeres explotadas, y medidas punitivas para los promotores y encubridores.

Por otra parte, la feminización de la pobreza es un hecho que contribuye al incremento exponencial de las situaciones de vulnerabilidad de la mujer. Ésta es una clara muestra de que la violencia de género y la desigualdad son elementos inseparables.

La verdadera violencia estructural, aquella ejercida por el patriarcado a través de la imposición táctica de valores económicos, sociales y culturales, se consolida en una pérdida en cascada de conquistas logradas, tras mucho esfuerzo, por los movimientos feministas. Esto constituye una forma más en que el capitalismo desvaloriza y precariza el trabajo produciendo desigualdad en este caso de género.

En este sentido, desde Izquierda Unida seguimos luchando por erradicar la brecha salarial entre mujeres y hombres. Combatimos la segregación laboral y la precarización de los sectores laborales más feminizados. Reivindicamos el aumento de la baja parental hasta igualarlo a la maternal. Apostamos por la puesta en valor de las tareas de cuidados, como funciones fundamentales dentro de una sociedad cuyo eje central son las personas, y no cesaremos en nuestra defensa del aborto libre y gratuito.

Lucharemos por la visibilización del conflicto de género, tanto en lo que al trabajo de cuidados se refiere como a la invisibilización de las mujeres por mal uso del lenguaje.

Trataremos de implementar medidas encaminadas a la abolición de la prostitución

como una de las armas de dominación de género.

Todas estas medidas deberán ir apoyadas en una educación que sirva para recuperar la memoria de las mujeres y para poner en valor el papel de la mujer en la sociedad.

El feminismo debe considerarse un elemento vertebrador de todas las políticas de transformación social desde la izquierda. La igualdad real y efectiva debe formar parte constitutiva de la democracia, de las relaciones de producción y personales, del modelo económico y de todos los ámbitos que conforman el entramado social.

Asistimos a una intensa ola a lo largo de todo el mundo de mujeres que están haciendo un esfuerzo enorme para cambiar su alrededor, para participar en su vida, para ser protagonistas de la historia, y lo hacen reuniéndose, adueñándose del espacio público, empoderándose de forma colectiva y creyendo con otros que la alternativa es posible. Solo lograremos una sociedad más humana con la participación activa de las mujeres en la vida política, económica, social y cultural. Este es el punto de partida para acabar con todas formas de discriminación y de violencia contra las mujeres, contra los hombres, contra la ciudadanía.

## **II. 4. Inmigración, paz y solidaridad internacionalista.**

### **II. 4. 1. Inmigración.**

Izquierda Unida considera que ningún ser humano puede ser ilegal y que ninguna discriminación por razón de género, raza, cultura, nacionalidad u orientación sexual e identidad de género, es ni aceptable ni regulable. Por el contrario, el modelo de sociedad hacia el que nos lleva esta deriva neoliberal, pretende instaurar la desigualdad como norma, desarrollando un discurso que se ceba con los colectivos más vulnerables de la sociedad. A la criminalización del inmigrante, como causa y causante de males, se suma ahora la coacción a aquellos colectivos, organizaciones o ciudadanos a título individual que con reformas del código penal, como es el artículo 318 bis, se les amenaza con persecución y penas privativas de libertad por auxiliar, ayudar o simplemente dar cobijo a personas inmigrantes sin documentación.

La desigualdad es un elemento a través del cual el Capital, puede contar con mano de obra barata y sumisa. Por otra parte, los discursos fascistas que sitúan al inmigrante como chivo expiatorio, proporcionan un enemigo, al que se señala. Responsabilizándole de una situación que ha sido generada por las ansias de la acumulación. Muchos de los recortes llevados a cabo por el Gobierno del PP se

basan en este discurso, los recortes en programas de acción social por parte del Gobierno de Aragón, o la negación de la atención sanitaria a aquellas personas cuya situación administrativa es irregular.

Se trata de medidas que van a incrementar el déficit social existente, que van a dificultar la acogida de estas personas en nuestros municipios. Frente a todo esto es necesario garantizar la incorporación de todas estas personas en los ámbitos de salud, vivienda, educación, servicios sociales, asociacionismo. Desde políticas públicas integrales que persigan dignidad y justicia social para toda la ciudadanía.

En el mundo del trabajo, por otra parte se hace más necesario que nunca garantizar la protección, facilitar la información, denunciar las situaciones de infracción de derechos. Frente a los mensajes que tratan de culpabilizar a las personas más débiles, y las políticas que atentan contra la dignidad humana apostamos por un modelo de sociedad que supere el actual modelo de explotación basado en la desigualdad que obviamente incluye a aquellos ciudadanos, en situación administrativa irregular, siendo especialmente duro con empresarios o propietarios de inmuebles que se aprovechen de la indefensión de ciudadanos en situación irregular.

#### **II. 4. 2. Paz y Cooperación.**

La profunda crisis económica que estamos viviendo no solo está produciendo una pérdida de derechos a las clases populares en los países desarrollados, afecta al conjunto del planeta. Aumenta las desigualdades sociales, la esquilma de recursos naturales en países periféricos, y la utilización de la guerra como instrumento de política internacional. Esto acentúa el funcionamiento antidemocrático de las instituciones internacionales, y el gasto en armamento y programas militares.

En estos momentos, la cooperación y solidaridad internacional se torna fundamental, desde una perspectiva internacionalista de apoyo a los procesos emancipadores y de lucha contra el imperialismo de cualquier tipo. La crisis no puede ser una excusa para reducir nuestra cooperación y mucho menos a países donde el apoyo es absolutamente necesario. No se puede permitir la reducción de solidaridad internacional mientras se mantienen costosas y constantes intervenciones militares.

Pese a ello nos encontramos, también en cooperación, con continuos recortes tanto a nivel estatal como autonómico con la excusa de la crisis.

El territorio aragonés tampoco es ajeno a esta escala militar, como en el caso de

la utilización del aeropuerto de Zaragoza, en la reciente ocupación militar de Mali y la servidumbre territorial del Campo de Maniobras de San Gregorio y el Polígono de tiro de las Bardenas.

Es necesario garantizar la seguridad mundial, pero desde la base de la seguridad humana y compartida, que tenga como principal objetivo no intereses económicos, sino acabar con el hambre y las desigualdades sociales a nivel mundial.

Para ello es necesario reforzar nuestra cooperación internacional en base a estos principios, a costa del gasto armamentístico que es el más alto en la historia de España. Nuestro internacionalismo se sustenta sobre la superación del sistema capitalista y la construcción del socialismo.

## **II. 5. Cultura.**

### **II. 5. 1. La cultura, fundamento de una sociedad libre.**

La cultura es la base de una sociedad libre y una ciudadanía consciente, la cultura no es neutral y pertenece al ámbito de la lucha ideológica. Por ello, se pretende reducir la cultura a la simple "industria del entretenimiento", anulando el espíritu crítico y limitando la cultura a un ocio mercantilizado y alienante.

El derecho a la cultura está siendo desmontado en Aragón, donde los presupuestos de Cultura de la DGA han sufrido un recorte del 80% en los dos últimos años. Una vez descontando el gasto de personal, Aragón es de las comunidades que menos invierte en cultural después de Ceuta y Melilla.

Esto evidentemente, también afecta a las personas que trabajan en la cultura donde se ha pasado de 16.700 empleos vinculados en 2011 con la Cultura, a los 9.200 actuales. Estos recortes en educación, museos o bibliotecas, van acompañados de un modelo cultural consumista, alejado de valores éticos y ciudadanos y de una participación comunitaria. Un modelo cultural en definitiva, que apuntala el actual sistema neoliberal e impide la creación de un modelo alternativo.

Nos encontramos también ante una privatización de los medios de comunicación públicos, y la acumulación en cada vez menos manos de las empresas de comunicación, sometiendo al conjunto de la sociedad a una información sesgada e interesada por fines partidistas y empresariales.

Por lo que desde Izquierda Unida reclamamos la necesidad de una cultura libre, el libre acceso a la comunicación, una comunicación entendida como servicio público. Promovemos la creación y difusión del conocimiento y la cultura desde la participación democrática y comunitaria, para que llegue a toda la ciudadanía y pueda cumplir su labor emancipadora.

Para Izquierda Unida, es fundamental la sensibilización de la sociedad por la cultura como parte de sus derechos y del bienestar social que aporta. Para ello, deberemos fomentar la participación activa de los sectores implicados, acabando con la visión de la cultura como fuente de consumo capitalista y lógicamente, aportar desde las administraciones, los recursos suficientes para que la cultura sea una realidad más allá de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos y del ámbito geográfico en el que nos encontramos, con especial mención al mundo rural.

Ciertamente se hace necesario replantear los modelos culturales con nuevas políticas que alejen al sector, duramente golpeado por los recortes, de la inestabilidad, la arbitrariedad y la falta de transparencia que ahora sufre. Estas políticas deben planificarse conjuntamente con la administración y los agentes culturales implicados, dejando de lado intereses particulares, bajo un estricto control y responsabilidad pública de los recursos disponibles.

Son muchas, las asociaciones y colectivos culturales que trabajan a lo largo del Estado, pero también en Aragón, en estrecha colaboración por el desarrollo de la cultura en sentido más amplio, dejando a un lado los intereses particulares, buscando soluciones globales a todos los colectivos implicados, seriamente afectados por los numerosos recortes que se están produciendo a todos los niveles de la Comunidad Autónoma y que están llevando al sector, a un momento muy complicado.

## **II. 5. 2. Ejes esenciales para una política cultural.**

Desde una posición común con muchos de esos colectivos Izquierda Unida asume y hace propios sus objetivos principales que son:

1. La cultura es un derecho.
2. La cultura desarrolla valores esenciales en una sociedad democrática y aporta valores para la convivencia.
3. Debemos combatir los recortes, fijar como objetivo mínimo de inversión en la Comunidad Autónoma, el 2% del PIB en Aragón.
4. Impulso y creación de un mecanismo de participación política con el sector y la sociedad, creando el Consejo de la Cultura y las Artes de Aragón.
5. Buscar modelos más objetivos, igualitarios y democráticos de apoyo a la creación cultural. Prestando especial atención a los artistas aragoneses.
6. Adecuar los sistemas de ayudas a las nuevas necesidades de los sectores.
7. Apoyo al desarrollo del talento y la creatividad, así como de la creación más contemporánea a través de la investigación.
8. Fomentar mayor movilidad de los creadores y los productos culturales tanto dentro de Aragón, con atención especial al mundo rural, así como tanto en España, como a nivel internacional.
9. Defenderemos la aplicación de códigos de buenas prácticas en la gestión de las políticas culturales que impliquen a instituciones, gestores/as y técnicos/as, empresas culturales y creadores/as y que redundará en la necesaria transparencia ante la ciudadanía.
10. Cultura y Educación.- Sin duda la Cultura puede aportar en el ámbito educativo iniciativas que añadan valor a los currículos académicos, más allá de las meras actividades extraescolares. Una cultura, que aporte una dimensión de imaginación creativa e innovadora de la que a menudo carece el sistema educativo. Disciplinas como el teatro, la música, la danza, las artes plásticas, la escritura, la experimentación científica, la implementación tecnológica, deben tener en cuenta en su justa medida en los diferentes planes de estudio y a lo largo de todo el sistema educativo.
11. Cultura y Medios de Comunicación. Deberemos usar para ello las herramientas de las que dispone la Comunidad Autónoma, implantando una mayor consideración a la cultura, como valor no residual.
12. Elaboración, junto con los profesionales de la cultura, de un Plan Estratégico de la Cultura en Aragón que marque objetivos a corto, medio y largo plazo.

13. Impulsar una Ley de la Cultura en Aragón, para normalizar y regular el derecho de los aragoneses a unos mínimos culturales.
14. Nuestro modelo cultural ha de promover las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza en términos de responsabilidad y respeto; defender los derechos de los animales y denunciar cualquier forma de espectáculo, festejo, etc. que se base en la tortura, explotación y/o dominación de los animales.
15. Desarrollaremos medidas concretas de accesibilidad de la cultura.
16. Fomentar la creación y mejora de infraestructuras culturales de propiedad y gestión pública, especialmente en aquellos casos en los que el déficit de ellas es evidente, como pueden ser teatros, salas de conciertos, etc.
17. Protección y promoción de la cultura tradicional aragonesa.
18. Todas estas medidas irán apoyadas de un plan estratégico de financiación de la cultura, tanto de las industrias culturales como de la accesibilidad a la misma.

### **II. 5. 3. Política lingüística.**

Aragón es una Comunidad multilingüe en la que junto al castellano, lengua mayoritaria y oficial en todo su territorio, conviven otras lenguas en determinadas zonas, como son el aragonés y el catalán, con sus distintas modalidades y variantes.

Esta pluralidad lingüística constituye un rico patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón, reflejo de una historia y cultura propias, patrimonio lingüístico que debe ser conocido y valorado por sus habitantes, así como protegido y fomentado por todos los poderes públicos aragoneses, mediante las medidas normativas y las acciones de gobierno más adecuadas.

En este sentido, la reforma a la timorata Ley de Uso y Protección de las Lenguas de Aragón, es un clarísimo paso atrás, que Izquierda Unida debe combatir, al objeto de consolidar y fomentar este rico patrimonio lingüístico que nos pertenece, patrimonio histórico- cultural, que debiera ser objeto de especial respeto y protección, normalizando el mismo, no desde un diferenciador en clave territorial-nacional, sino como nexo de unión entre pueblos que han tenido y tienen, una historia y unas tradiciones comunes de siglos de historia.

Por todo ello, Izquierda Unida debe impulsar y colaborar con cuantos agentes sociales aragoneses, busquen promover en Aragón, la protección, recuperación, enseñanza, promoción y difusión del patrimonio lingüístico de Aragón, al igual que favorecerá, en las zonas de utilización predominante, el uso de las lenguas propias en las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones públicas aragonesas, así como con nuestra organización política y social.

#### **II. 5. 4. El deporte.**

El deporte es esencial para la salud física y psíquica de las personas, también supone una herramienta para el desarrollo de aptitudes como la convivencia, la solidaridad y el enriquecimiento mutuo. Se trata de valores que contribuyen a generar escenarios de cohesión social. Por lo tanto no se debe de tener en cuenta solo como una práctica que facilita valores humanos y beneficios para la salud de forma circunstancial, sino integrar con una mayor preponderancia en nuestros sistemas educativo y sanitario la práctica de ciertas modalidades y prácticas deportivas, implementado mínimos exigibles a nivel curricular.

No obstante, en la actualidad, el deporte se reduce a un mero espectáculo y sobretodo un negocio, donde la ciudadanía es fundamentalmente espectadora y consumidora de un producto. La falta de programa e instalaciones para la práctica del deporte va en aumento, especialmente en las zonas rurales aragonesas, lo que fomenta una desigualdad territorial para la práctica deportiva. Nos oponemos abiertamente a la gestión privado de instalaciones públicas municipales, exigiendo la reversión de su gestión a lo público. No concertaremos con entidades privadas el deporte público. Respecto a las Sociedades Anónimas Deportivas, no las subvencionaremos, ni avalaremos bajo ningún pretexto. Además de quitar cualquier preferencia en el uso de las instalaciones deportivas públicas, por las que deberán pagar de acuerdo a su importancia.

Entendemos el deporte como un recurso generador de salud y bienestar individual, y al mismo tiempo, como elemento de socialización, capaz de potenciar la integración desde distintos ámbitos y realidades. En consecuencia, apostamos por la potenciación de la práctica deportiva de base, desde una óptica del acceso universal de toda la ciudadanía. Por ello, destacamos la necesidad reforzar los programas e instalaciones deportivas, acometiendo programas específicos que fomenten la práctica del deporte desde la base, especialmente en niños y jóvenes, y teniendo muy presentes las categorías femeninas.

## **6. Municipios, instituciones y poder ciudadano.**

### **II. 6. 1. Municipios, agentes de cambio social.**

El municipio es el espacio natural en el que el ciudadano vive y se desarrolla y por lo tanto es el escenario natural de la sociedad y de la vida pública. Como tal su organización política, los ayuntamientos, ha de ser el corazón del andamiaje institucional del país. Son los ayuntamientos los que han de dar respuesta temprana a las necesidades de la ciudadanía pues es a ellos, como administración más cercana, a los que se recurre, tanto en momentos como estos, de grave situación económica como en momentos de mayor bonanza para satisfacer derechos de segunda y tercera generación.

Esto ha generado que nuestros ayuntamientos asumiesen la prestación de servicios que en principios competencialmente le correspondían a otras administraciones sin ni siquiera ver mejorada su capacidad financiera por la vía de las aportaciones del estado. Superar esta situación implicaría una profunda revisión competencial y una correcta política de financiación local, que garantizase la coordinación en la prestación de los servicios públicos, siempre en aras de garantizar su carácter público en base a criterios de la máxima calidad y eficacia social.

Tanto PSOE como PP han impedido que se abordase este asunto olvidando que son los municipios el eslabón básico de la arquitectura del estado. Esto ha provocado una falta de financiación que ha favorecido los procesos de especulación. Para facilitar esta irresponsable política económica en la que el suelo se ha alejado de su función social y se ha especulado con el derecho a techo, PP y PSOE han garantizado una laxa regulación que ha permitido que la corrupción urbanística, en la que se han visto implicado principalmente PP, PSOE y algunos partidos autonómicos, campe ahora a sus anchas en nuestro país.

El resultado de esta nefasta política ha sido claro: Una crisis profunda en la que la ciudadanía pierde derechos fundamentales como el trabajo, la educación, la salud o la vivienda y unas instituciones que han sido sometidas al poder financiero que las quiere reducir a meros gestores, incapaces de intervenir y tomar decisiones en favor de la gente y no de los poderes financieros.

Unos ayuntamientos fuertes y bien financiados, unos servicios públicos inviolables y capaces de dar respuesta a las necesidades del conjunto de la población, hubieran impedido este drama del que además se quiere salir de la mano de sus responsables. Estos que antes especularon con la deuda privada y ahora lo

hacen con la deuda pública, estrangulando a las instituciones y obligándolas a vender lo público en aras de continuar con un modelo capitalista que les permita mantener su increíble tasa de ganancia. Si antes se especuló con el derecho al techo, ahora se pretende especular sin complejos con el derecho a la salud, a la educación, a las pensiones. Es por ello que debemos convertir a los Ayuntamientos en magnificas herramientas de lucha, sobre todo en este periodo excepcional. Cuestionando y confrontando, movilizándonos en la calle y enfrentándonos a las políticas de derecha, realizados en buena medida por el bipartidismo, desde la máxima beligerancia.

Esta es la agenda que mantiene el PP y con la que debemos ser profundamente beligerantes. Es necesaria una reforma de la arquitectura institucional que no esté sujeta a la dictadura de la política de consolidación fiscal, la dictadura del déficit y la pérdida de democracia. Una reforma que ha de ser un eje fundamental del nuevo y necesario proceso constituyente

## **II. 6. 2. Nuestro papel en las instituciones.**

Existe hoy una intención clara de reducir a la mínima expresión las instituciones y su capacidad de tomar decisiones de manera soberana (impulsada desde el ámbito internacional, mediante organismos controlados por los poderes económicos como el BM o el FMI) con el fin de condicionar económicamente su actuación y eliminar las trabas del marco jurídico, económico y social fruto de la transición que ponen dificultades a la reorientación del capitalismo español hacia el "mercado" de la deuda y los servicios públicos.

Es en ese escenario donde Izquierda Unida, a partir de su configuración como movimiento político y social, siguen entendiendo que es indispensable actuar también en el ámbito institucional. Pero no como un fin en sí mismo, ni como un objetivo al que supeditar el resto de su actividad, sino como un campo de actuación desde el que intentar incidir en la realidad y desde el que aportar soluciones a los problemas concretos de la ciudadanía. Intervenimos en toda la realidad Aragonesa, en todas sus instituciones incluso aunque sigamos proponiendo la disolución de algunas como las Diputaciones Provinciales o la reforma de otras como las Comarcas (para dotarlo de la transparencia debida y huir del clientelismo que en ocasiones ha supuesto, reforzando su parte positiva como es el acercamiento de la gestión al ciudadano).

Así, nuestra presencia en las instituciones trasciende la actividad política cotidiana y ha de servir, al mismo tiempo, para procurar desmontar desde su interior el edificio institucional construido con el fin de dar legitimidad a un sistema político de democracia formal, basado en un modelo bipartidista, generado por una ley electoral injusta que intenta evitar una actividad política institucional crítica y alternativa.

Declaramos pues la insuficiencia de la democracia de partidos como sistema de democracia profunda y la falta de representación que supone una delegación, a través del voto, cada cuatro años. Proponemos en consecuencia un modelo democrático de base popular que apueste por una acción de democracia radical en la toma de decisiones frente a la delegación absoluta de poder en los representantes, porque de nada vale conquistar mayores cuotas de poder institucional si no están sustentadas en una sociedad organizada en la misma proporción.

Por ello, el hecho de que defendamos principios básicos como la propia Democracia, el papel del Estado plasmado en las instituciones, la conveniencia de que los representantes del pueblo sean remunerados para que no haya dependencias de los poderes económicos, la necesidad de que los partidos sean financiados por un sistema público para garantizar que hacen bien su trabajo como intermediadores sociales, no nos convierte en los principales defensores de este sistema sino que lo hacemos desde una opción clara por el cambio del mismo.

No podemos ignorar, por otro lado, la fuerte desafección que se ha producido con respecto a las instituciones políticas de cualquier ámbito. Una desafección producto de muchas variables, unas achacables al mal funcionamiento de sus principales actores, los partidos políticos; otras, a estrategias políticas entre las que se encuentra la interesada demonización de la democracia mediante la extensión de lemas simplistas como el "todos son iguales y todos se aprovechan en beneficio propio"

El hecho de que Izquierda Unida esté en las instituciones, no ya gobernando, sino en la oposición, es molesto para quienes pretenden actuar desde la impunidad y el silencio cómplice. La presencia de Izquierda Unida significa, con todas las limitaciones, actuar en beneficio de la mayoría social desde los espacios de información e influencia, sacar del anonimato a muchos de nuestros ciudadanos y llevar su voz a los ámbitos de poder, convertir las instituciones en instrumentos útiles de transformación social y política. Por ello nuestro objetivo debe ser ocupar legítimamente las instituciones con el fin de devolverlas a la ciudadanía.

Aun en el momento actual, con unas instituciones reducidas a la mínima expresión, el papel de transformación de las mismas sigue siendo de primer orden. Es por ello que Izquierda Unida no puede ni debe renunciar a su presencia en las mismas dado que va en su propia naturaleza como formación política, pero tampoco puede adoptar posiciones que le dejen en un papel residual. La aspiración de Izquierda Unida debe ser ocupar el mayor espacio posible en la toma de decisiones de la institución para llevar adelante con coherencia el programa político de la mayoría social.

Hoy más que nunca nuestro trabajo institucional ha de tener una doble función: mejorar las condiciones de la mayoría social, de las capas populares y someter a contradicción las lógicas que aceptan y acatan este modelo injusto. Esta tensión es doble y constante y nos obliga a un continuo esfuerzo dialéctico.

Debemos mostrar estas contradicciones del modelo pero evitando asimilarlas, especialmente en casos o situaciones en que su puesta en práctica choque frontalmente con nuestro discurso y ponga en entredicho la coherencia de nuestro mensaje y por tanto nuestra credibilidad.

En definitiva, debemos entender las instituciones como un escenario más de lucha, y encajar nuestro trabajo en ellas de manera que permita llevar a la práctica nuestro ideario político. Debemos tener clara la función pedagógica que debemos desarrollar ya que nos encontramos en una sociedad carente de cultura de participación política y con unos medios de comunicación controlados. El cambio que buscamos no se producirá solo dentro de las instituciones con sus reglas del juego por lo que deberemos encontrar los mecanismos que visibilicen su imposibilidad y elegir aquellas acciones que, aunque costosas, sean viables para escenificar el enfrentamiento a esas normas.

La labor de ejercicio y presencia en las instituciones por parte de Izquierda Unida

cobra ahora mayor sentido cuando hay una tarea defensiva que desarrollar. Es clave proteger los avances sociales conquistados por la clase trabajadora y a las organizaciones sociales y sindicales que articulan nuestra realidad.

En este periodo, a la par que combatimos los recortes generalizados a todas las capas de la población, debemos centrar esfuerzos en la defensa de las redes, asociaciones, tejido social organizado eminentemente de izquierdas porque el mismo será la base de la organización de la rebeldía y la resistencia social y con nosotros de construcción de la propuesta alternativa.

### **II. 6. 3. Un poder indelegable: el poder ciudadano.**

Nuestra democracia representativa se basa en la delegación del voto cada cuatro años en unos representantes públicos que lo ejercen en el marco de unas instituciones. Pero esta delegación del voto no es completa, no puede entenderse así, los representantes elegidos no pueden arrogarse la capacidad de modificar un texto constitucional en su parte fundamental mediante una mera decisión mayoritaria en el Parlamento sin consultar previamente al pueblo constituyente que aprobó esa norma. Esto es, unos representantes elegidos para un periodo de cuatro años se arrogan la capacidad por sí mismos, sin someterlo a referéndum, de reformar el artículo 135 de la CE y por ende modificar el objetivo económico de todas las administraciones del Estado.

Tras pasada esta línea, la consecuencia es la vulneración de la relación que se había establecido entre el ciudadano y su representante, su delegación de poder, y, por tanto, la violación del principio fundamental de la democracia representativa, la cual revela todas sus carencias y limitaciones en una coyuntura como la actual. Llega, así, el momento de empoderar a la ciudadanía, atribuyéndole un papel activo no solo en el control sino en la propia propuesta política. La delegación de voto en los representantes electos no implica ni la pérdida de capacidad política de la ciudadanía ni otorga libertad absoluta para el representante para tomar decisiones trascendentales. Es decir, entra en juego el poder ciudadano.

Entendemos el poder ciudadano como el poder de la ciudadanía organizada en formas diversas para la toma de decisiones en todos los ámbitos de su vida (político, económico, social, ambiental...) para el ejercicio pleno de su soberanía. Es intolerable, que una figura como la Iniciativa Legislativa Popular, aunque reúna los requisitos, esté a merced de las mayorías absolutas en la Cámara sólo para ser admitida a trámite. La ciudadanía, cada vez más, quiere participar en la toma de decisiones fundamentales.

En consecuencia, y como emanación de esa soberanía popular, es imprescindible crear mecanismos de democracia directa y radical que superen a la mera democracia representativa (cada vez más devaluada, además, en su práctica), articulando las bases para la construcción de un modelo de democracia participativa en el que la ciudadanía asuma su protagonismo a partir de su compromiso personal y colectivo, para lo que es ineludible fomentar su formación política, dotándola de los necesarios conocimientos para actuar como sujeto racional y no solamente sentimental.

Para llevar a cabo todo lo anterior, Izquierda Unida propone:

- Planificación participada de las políticas públicas. Defendemos la planificación de las políticas públicas de forma participada con la sociedad civil organizada que tiene que formar parte de la decisión en materias como las líneas estratégicas de desarrollo económico y social a nivel autonómico y local, el empleo de recursos públicos en su consecución, el diseño de los planes a través de los cuales se logre la transformación de esta realidad, el desarrollo territorial equilibrado y la justa distribución de la riqueza.
- Corresponsabilidad social. Responsabilidad compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y las Administraciones públicas en el proceso de formación, ejecución, control y evaluación de la gestión social comunitaria, para el bienestar de las comunidades organizadas.
- Cogestión de lo público. Procesos mediante los cuales las comunidades organizadas participen, en cualquiera de sus niveles e instancias, en la decisión, control de la ejecución y evaluación periódica, de la prestación de servicios públicos e inversiones necesarias para mejorar la calidad de vida en su ámbito geográfico.
- Consultas y referendos para la toma de grandes decisiones. Para aquellas decisiones que tengan un carácter estructural en un territorio y cuyo periodo de aplicación sea superior a un mandato electoral deberán realizarse consultas ciudadanas o referéndum.

- Control ciudadano de las cuentas. Transparencia en la gestión. Es necesario instaurar mecanismos que permitan no sólo la participación en las decisiones de carácter económico de las administraciones sino el control posterior, bajo los principios de publicidad y transparencia, de su ejecución y del gasto. Por ello mecanismos como los presupuestos participativos, los observatorios de la contratación o las auditorías ciudadanas son instrumentos necesarios para profundizar la democracia.
- Introducción de mecanismos de participación ciudadana en la elaboración legislativa y en la actividad administrativa. La actividad legislativa, sobre todo, pero también la actividad administrativa con incidencia directa en la ciudadanía, ha de contar en su procedimiento con la participación de la sociedad, ya sea a través de organizaciones o colectivos, ya sea directamente. Además, la evaluación del impacto social de la normativa que se tramite ha de figurar en términos claros y entendibles para cualquiera, siendo un documento imprescindible en cualquier elaboración legislativa. Junto a ello, y en aquellos ámbitos institucionales más cercanos a los ciudadanos, como, por ejemplo, los Ayuntamientos, la participación directa de la ciudadanía debe garantizarse mediante mecanismos que faciliten la información precisa y la posibilidad de formular propuestas

#### **II. 6. 4. Fomento y visibilización de la participación juvenil**

Es preciso dar voz y espacios a una juventud que sufre especialmente la crisis y que aporta energía y nuevas ideas que son cruciales para un momento de cambio radical, donde la política no puede estar copada por la generación de la transición.

Ante los ataques que están sufriendo los Consejos de la Juventud tanto a nivel local como autonómico como estatal. Hasta ahora, han ido cayendo los Consejos autonómicos uno a uno en un intento de cercenar la participación y de acabar con las propias entidades que de ellos participan. Debemos posicionarnos en la defensa de estos como herramientas de participación y fiscalización de las políticas de juventud. Los Consejos de la Juventud son necesarios. Son el altavoz de la juventud frente a las instituciones, como reconoce la propia ley.

## **II. 7. Federalismo, un modelo de Estado solidario.**

El debate sobre el federalismo y derecho a la autodeterminación, se ha venido dando con insistencia en los últimos meses en el conjunto de Estado, todo ello, a raíz de la petición de un referéndum por parte de la Generalitat de Catalunya. Ante este hecho, hay que definir claramente la posición que debiera basarse en los siguientes preceptos amparados en las actuales posiciones de Izquierda Unida Federal.

Izquierda Unida defiende el derecho de los pueblos a elegir libremente su futuro, pero para ello, hay que definir claramente cuál es el sujeto político que decide. En el marco de nuestra X Asamblea Federal, se acordó, por la importancia del debate, celebrar una conferencia sobre el modelo de Estado a fin de definir nítidamente nuestra apuesta por un Estado Federal Republicano, Solidario, Cooperativo y Plurinacional. Desde IUA saludamos este debate y llamamos a la implicación del conjunto de la militancia a que de forma constructiva, profunda, serena y transparente lo aborde en una Conferencia Estatal. Es necesario un proceso constituyente que de lugar a un nuevo orden económico y social y entendemos que una República Federal, Solidaria, Cooperativa y Plurinacional es el modelo de Estado que se amolda a esta legítima aspiración.

## **TESIS III. IZQUIERDA UNIDA, HERRAMIENTA PARA EL CAMBIO**

La X Asamblea Federal definía la alternativa que tenemos que crear como un proceso de acumulación de fuerzas doble, en la calle y en las instituciones, con el fin de convertirnos en fuerza política de la mayoría social capaz de generar confianza a los ciudadanos y ciudadanas y enfrentar el contraproceso constituyente.

Para lograr lo anterior, es esencial que definamos los ejes básicos que han de nutrir nuestra propuesta política para, a partir de ella, actuar en dos frentes diferentes que hemos de saber complementar: por un lado, contribuir a la creación y articulación de un Bloque Social Alternativo y, por otro, introducir en las instituciones en las que tenemos presencia ese discurso alternativo, intentado que sirvan con instrumento en el surgimiento de esa nueva realidad constituyente que reclamamos, de ese nuevo orden social que le de la soberanía al pueblo de forma real y permanente.

Es por ello que nuestro objetivo básico es poner de manifiesto y generar conciencia sobre el vaciado de contenido del acuerdo básico del 78 y la acumulación de fuerzas para la convocatoria de un proceso constituyente que devuelva la soberanía al pueblo y configure un nuevo orden constitucional, esta vez desde una opción republicana. Así es como Izquierda Unida en su conjunto ha entendido el proceso constituyente en su pasada Asamblea Federal, como "la construcción de un nuevo sistema constitucional, de una nueva legitimidad que el soberano, el pueblo, otorga a las nuevas instituciones del nuevo estado, necesaria y evidentemente una República"

Este proceso de acumulación para la convocatoria del Constituyente debe irse realizando de la mano de los movimientos sociales siendo conscientes de que este proceso que fuerce el cambio debe ir diseñando a la par los principios del ese nuevo Modelo Productivo que aspiramos a construir colectivamente.

### **I. III. 1. La Alianza Social.**

Una transformación social como la que persigue IZQUIERDA UNIDA requiere un trabajo doble desde la movilización social y desde las instituciones que dictan las normas y toman decisiones. La acción institucional, sobre todo en estos momentos y tras las modificaciones constitucionales y legislativas producidas, para que sea verdaderamente transformadora deberá venir acompañada con una acumulación de fuerzas en lo social suficiente que permitan a la primera modificar las reglas de juego.

Por tanto para hacer que Izquierda Unida sea más determinante tenemos que continuar con el camino emprendido hace unos años, ampliando su marco de relaciones y estableciendo una alianza con los movimientos sociales más próximos.

Estas alianzas se han ido fraguando reconociendo el papel complementario de todos los sujetos entre sí, entendiendo que si cada uno de ellos crecía el conjunto crecía, estableciendo estrategias y mensajes comunes que pusieran de manifiesto lo común y no lo diferente y sobre todo permitiendo que la propuesta común y el sujeto que representa avance.

Por tanto, tenemos que profundizar en esas estrategias y mensajes comunes en este momento. Definir cuáles tienen mayor capacidad de penetración y a la vez cuáles son generadores de mayor transformación y reforzamiento de los propios movimientos sociales y políticos que los impulsan y del sujeto que representan Ese mensaje común y coordinado desde diferentes ámbitos, sumando la credibilidades de cada uno en su espacio, y no compitiendo entre todos por querer ser protagonista del mismo, es el camino para crear hegemonía y conquistar el poder.

### **III. 1. 1. Orígenes y antecedentes.**

Nos encontramos ante uno de los momentos más convulsos desde la llegada de la Democracia, provocados por los resultados electorales del 2010 y 2012 con una abrumadora mayoría del PP, un retroceso muy importante del PSOE y la aparición ante la opinión pública de tramas de corrupción generalizada que afectan a la mayoría de los partidos tradicionales que han tenido competencias de gobierno estatal o autonómico a lo largo de los últimos años.( PP, PSOE y CIU )

Una convulsión provocada por la falta de respuestas a estos problemas, con un sistema político-económico que no plantea alternativas al paro, a la propia crisis, al drama del desempleo, a la corrupción generalizada de una determinada clase de políticos y que por tanto arrastra a una buena parte de la sociedad a la desesperanza en la recuperación económica, en la reducción del desempleo y sobre todo los políticos que tienen que conducir esta.

Pero esa desafección no afecta a todos por igual, el bipartidismo está en crisis y su credibilidad se desploma, por lo que es momento para que Izquierda Unida aspire a ser el germen junto con los movimientos sociales de un cambio radical de escenario político. Juntos debemos propiciar y ser catalizadores de un nuevo proceso constituyente que aspire a refundar los cimientos del estado, no sólo en las formas sino también en el fondo.

Desde sus orígenes, Izquierda Unida se ha definido como un movimiento político y social, plural en lo ideológico y unitario en lo programático. La alianza con el tejido social y la ciudadanía organizada es una característica consustancial a su ser, parte de su ADN y uno de los factores distintivos frente al resto de las fuerzas políticas. No tiene sentido una Izquierda Unida que no intente maximizar esa alianza, la cual habrá que buscar donde la realidad concreta nos imponga que se desarrolla, en el seno de la organización o fuera de él, con el fin de transformar la sociedad.

Inicialmente, esta característica básica de Izquierda Unida queda planteada en el objetivo de converger en su seno fuerzas que el Partido Comunista de España, -principal organización impulsora de Izquierda Unida- reconoce como nuevos sujetos revolucionarios y que, aun estando presentes esas líneas en esta formación (feminismo, ecologismo y pacifismo)-, sus organizaciones tenían rasgos, análisis y aportaciones propias.

Además supone un encuentro de distintas tradiciones ideológicas (socialistas, comunistas, republicanos, libertarios,...) en un proceso conjunto en el que no perdió sus señas de identidad, sino que las complementó, consiguiendo mucho mayor reconocimiento y fuerza en sus reivindicaciones propias.

Con muchas de estas fuerzas se había confluído tradicionalmente en reivindicaciones concretas y en una en particular, las mesas anti OTAN, que acaban suponiendo un análisis global de la sociedad y germen de nuestra organización.

En el análisis de la historia de esta alianza con lo social, podemos distinguir tres fases:

Una primera, partiendo de una gran ilusión por una nueva forma de hacer política, que se traduce en un enorme esfuerzo de forma mayoritaria por la construcción de ese movimiento. Son años de crecimiento tanto social, en menor medida como lo demostrará el siguiente periodo, como institucional, en una parte no despreciable por efecto rebote de la desacreditación de PSOE.

En una segunda fase nos encontramos, por muy diferentes causas, con una pérdida de representación electoral, junto con la salida de varias formaciones de Izquierda Unida, enfrentamientos internos y alejamiento de ese proyecto de movimiento político y social por una organización de prácticas más clásicas.

Finalmente tenemos, una tercera fase, la actual, en la que presentamos un crecimiento considerable como referencia -tanto social como política-, pero en la que adolecemos aún de cierto desprestigio como fuerza transformadora, heredada de algunas actuaciones incorrectas en la fase anterior -maximizadas en ocasiones por un exceso de crítica exterior-.

Esta última fase, queda plasmada en:

... una convergencia con organizaciones y personas vinculadas a la lucha social, que nos reconocen abiertamente como referente político -a veces, junto a otras organizaciones-.

... un acercamiento a ciertas formas de organización social -nuevas y clásicas- con las que confluímos en luchas particulares, cada vez más, y que cada vez nos miran con mayor simpatía, pero las que nunca nos tomarán como referente válido.

... un encuentro con organizaciones políticas minoritarias y sobre todo sociales y ciudadanas, con las que trabajamos y somos referente para ellas, pero que nunca se integrarán dentro de Izquierda Unida.

... un alejamiento de una parte importante de la ciudadanía, desencantada en general con las formas y formaciones políticas actuales.

Es básico para nuestro análisis atender a esta realidad, escapando de cualquier tentación de justificarlos en base a nuestros deseos de lo qué debería ser. Nuestro discurso, desde los inicios de esta formación, se ha caracterizado por ello. Afirmamos que una organización política o social no queda definida por sus autodefiniciones, sino por los actos, políticas y propuestas que realiza. Desde esa posición nos atrevemos a defender que el PSOE no representa en su conjunto los intereses de las clases desfavorecidas.

En la misma línea debemos realizar un ejercicio de autocrítica, reconociendo que no basta con definirnos como un movimiento político y social, para que éste se desarrolle en el interior de Izquierda Unida. Aunque hemos tejido numerosas redes en torno a nosotros y nosotras en la última fase, no somos ni representamos en estos momentos la alianza social y política única y necesaria para encabezar un cambio real.

Además debemos reconocer que la pluralidad de este posible movimiento transformador -caracterizada en la plasmación que se hacía referencia anteriormente-, imposibilita que se desarrolle en el marco de Izquierda Unida exclusivamente, sino que con toda probabilidad, lo hará en un marco externo en

el que deberemos decidir si nos implicamos o no.

Es esencial que huyamos de la tentación de dirigirnos a ese posible movimiento, a esa posible alianza social, con un discurso análogo al que durante años utilizó con nuestra organización el PSOE, al llamarnos a la "casa común" frente a nuestra reivindicación de hacer una "causa común".

También debemos reflexionar sobre lo que significa unir, converger o confluir, acertando en los tiempos, buscando objetivos de manera que no se minusvalore el programa, las prácticas, la estrategia, y las infinitas acciones concretas y cotidianas en post de un mero paraguas organizativo. En ocasiones lo externo nos recuerda facetas de IU que no se trabajan correctamente, siendo las áreas de elaboración un buen ejemplo de ello dado que las mismas se crearon para ser espacios de confluencia y convergencia con lo externo. Es por tanto necesario que a la par que se inician procesos de convergencia, elaboremos un análisis crítico sobre las causas que han llevado a IU a actuar en ocasiones como un partido clásico y el porqué a veces se produce una participación interna tan escasa.

### **III. 1. 2. La constitución de un Bloque Social y Político.**

Tal y como se aprobó en la última Asamblea Federal, a la involución social, política, institucional y económica que se está produciendo, en lo que podríamos caracterizar como una descomposición del régimen surgido con la Transición, hay que contraponer un proceso constituyente que esté protagonizado por la inmensa mayoría. Esto, que resulta evidente, exige, sin embargo, de dos elementos indispensables: por un lado, un discurso claro, cercano, concreto, de alternativa posible, democrática y caracterizada por la superación del sistema (no se trata de volver a la situación de 2008, sino de construir un modelo social, económico y político diferente); pero, por otro, un sujeto que sea capaz de asumirlo y de llevarlo a cabo. Ese sujeto, obligatoriamente, ha de ser la ciudadanía. Pero una ciudadanía organizada políticamente, lo que no significa que necesariamente esté encuadrada en organizaciones políticas. En ese sentido, la constitución de un Bloque Social y Político ofrece el marco idóneo para que se produzca esa participación ciudadana, articulando la respuesta y propulsando la iniciativa constituyente. El papel de Izquierda Unida ha de ser el de colaborar en la construcción de ese sujeto protagonista, dotándole de las herramientas de análisis, de formación y de generación de propuesta de las que, en este momento, aún carece la mayor parte de la ciudadanía. Y ello desde el encuentro en aquellos ámbitos que se están creando y propiciando, en la medida de nuestras posibilidades, lugares de

confluencia mayor, superadores de la atomización que se está produciendo en ocasiones.

### **III. 1. 3. El camino para la configuración de ese nuevo sujeto político.**

Podemos afirmar que nuestras actuaciones a nivel Estatal y autonómico están aportando elementos positivos a la creación de ese nuevo sujeto. A lo largo de la historia de nuestra formación, ha realizado esta convergencia de distintas maneras, con resultados dispares. Desde la implicación histórica en los movimientos sociales reivindicativos existentes, hasta la participación en la creación de otros nuevos, con otros objetivos a los que había.

Es, desde hace unos cuantos años, en esta última fase cuando más se ha avanzado en esa necesaria confluencia.

Pero debemos ser conscientes de que no somos un fin, sino un medio más de transformación social. Tan válido como cualquier otro, pero no el único válido.

Y esto también debe ser tenido en cuenta por el resto de colectivos sociales y ciudadanos con los que configurar este nuevo sujeto revolucionario: ninguno es imprescindible, aunque todas las organizaciones somos necesarias.

No puede considerarse el movimiento social –nuevo o viejo-, ni nosotros podemos hacerlo, como la panacea de todos los males. En ocasiones adolece de elementos análogos a los que se critican en general a una organización política, en mayor o menor medida: carácter endogámico, al servicio de intereses políticos y personales particulares, único valedor de un cambio real, etc.

Como toda organización tienen y tenemos una carga negativa, de la que tenemos que ser conscientes, cada una en su ámbito. En estos momentos es imprescindible que cada una supere esa parte. Lo que debemos resaltar es el potencial de cambio que podemos tener todas juntas, mucho mayor que la mera suma cuantitativa.

Para la creación de este sujeto político es imprescindible que todas las organizaciones confluyan, sin voluntad de generar conflicto o imponer una determinada posición o liderazgo por mayorías numéricas o alianzas. Debemos generar el clima interno y externo para que esa confluencia sea posible. Sin embargo, la unidad por la unidad no es un objetivo político; la convergencia es una estrategia que tenemos para aglutinar poder popular en torno a un programa verdaderamente transformador que permita cambiar la correlación de fuerzas desfavorable. Toda esa estrategia de convergencia no servirá para nada, por tanto, si de ella no sale un proyecto y programa transformador (tanto por insuficiente y reformista como por inaplicable por utópico e izquierdista); lo cual implica que somos nosotros y nosotras como

Izquierda Unida -parte fundamental y necesaria, pero no suficiente, del proceso- los que debemos ejercer un papel protagonista con nuestro discurso y nuestro trabajo para que ese programa sea el que vertebre el Bloque Social y Político.

Debemos ser conscientes de que ningún movimiento político o social, podrá encabezar o dirigir esta construcción, sino que tiene que ser la suma de las aportaciones de todos ellos. En una relación de escrupuloso respeto entre las organizaciones y la ciudadanía que se integren, respetando las dinámicas, tiempos y formas organizativas de cada una y en una radical horizontalidad, priorizando lo cualitativo pero sin olvidar que para la creación de ese nuevo sujeto político es necesario que todas las organizaciones y movimientos crezcan cuantitativamente y que cada vez sean más las personas que participen y se identifiquen con ese bloque político y social. Esto es fundamental para construir una amplia base social con capacidad de empoderarse y de impulsar el cambio necesario que genere la alternativa.

Desde ese reconocimiento mutuo, se podrá fijar una estrategia común de los principales actores y aliados sociales, una acción compartida en la consecución de unos elementos básicos en torno a la regeneración política y el establecimiento de una verdadera democracia. Un nuevo modelo social alternativo, que propicie la convocatoria de un poder constituyente ante el golpe del mercado y la rotura de las reglas del juego. Esta estrategia es abierta, en constante revisión, adaptación y complementación. Y abierta a quién se quiera sumar a ella.

Construir ese clima en nuestra organización, apostar en esa línea y que sea elemento director en nuestras relaciones con el resto de colectivos sociales y ciudadanos es nuestro reto actual. No es preciso definir cada uno de los elementos que se nos presentarán, pero si apostar por una forma y método para construir esta propuesta.

El objetivo es claro, es preciso pasar de un conjunto de luchas defensivas y sectoriales, a una fase de ofensiva en la disputa por la hegemonía política al neoliberalismo y para el establecimiento de un nuevo "sentido común".

Esa posibilidad se abre ahora, con la decadencia del sistema de partidos de la restauración juancarlista, con la crisis del "capitalismo de rostro humano", con la ruptura del pacto social del "Estado del Bienestar" y la imposición del modelo antisocial del capitalismo financiero globalizado, con la desaparición de la socialdemocracia como actor con un discurso político relevante...

A lo largo de su historia, Izquierda Unida ha sido el referente político del 5% o, en sus mejores momentos, del 10%. Es decir, una fuerza valiosa por lo que significa de mantenimiento de una posición discordante frente a los grandes consensos, pero sin gran capacidad de influir decisivamente en el curso de los acontecimientos y ser protagonistas del cambio. Venimos de tiempos de resistencia pero ahora toca pasar a la ofensiva. Para ello tenemos que estar a la altura del momento histórico que vivimos, no basta con crecer, no es suficiente alcanzar un 15%, se trata de tejer alianzas que den lugar a un nuevo sujeto político capaz de articular a la mayoría social.

Ahora, cuando la mayoría social de izquierdas nos perciba como actor principal y no secundario, se abre otra oportunidad, la de coprotagonizar ese anhelado cambio.

### **III. 2. Al rescate de la ética en la política. Una organización transparente.**

Desde la defensa de la democracia conquistada tenemos que rechazar todas aquellas manifestaciones que suponen un ataque general a todos los representantes públicos, que ponen bajo sospecha a todos los partidos y que acusan de derrochadoras a todas las instituciones y por ende a todos los funcionarios.

Sin embargo, esta opción general no es incompatible con incluir en nuestra propuesta nuestras señas de identidad la apuesta por la regeneración ética de la política, la reforma radical de las instituciones en cuanto al control ciudadano de su vida cotidiana y la persecución de la corrupción y la desviación de poder de los representantes públicos.

Por lo tanto, debemos combatir el tratamiento interesado de los principales medios de comunicación y su estrategia del "todos son iguales" con algo más que negar esa generalización con acciones que pongan en valor el ejemplo ético de nuestra organización y nuestros cargos públicos. Debemos proponer que se hagan públicos por parte de las instituciones el conjunto de retribuciones de los representantes, que se establezcan mecanismos de transparencia total en las contrataciones y de rendición de cuentas accesibles por la ciudadanía.

Pero además dar a conocer, por nuestros propios medios y webs, las retribuciones de nuestros representantes, el destino de las mismas y el sistema de financiación de Izquierda Unida, los límites a los mandatos que establecemos, el régimen de incompatibilidades... es decir todas aquellas normas que nos aplicamos y que nos aportan un plus de regeneración democrática y ética. En este sentido entendemos

que también tenemos que dar ejemplo en el desempeño de los cargos públicos y hacer frente al derroche en el gasto, máxime en un momento de tanto sufrimiento social, por lo que apostamos por el control de los salarios de los representantes electos por la ciudadanía de manera que ningún cargo público cobre un salario superior en 3,5 veces a la propuesta que Izquierda Unida tenga de Salario Mínimo Interprofesional, (retribución a la que solo podrán añadirse las dietas justificadas por locomoción y, en su caso, asistencia sí debe desplazarse fuera de su domicilio habitual o de la sede de la institución, así como una única retribución en especie consistente, en su caso, en la suscripción de un seguro frente a accidentes laborales).

### **III. 3. Una organización que comunica.**

#### **III. 3. 1. Los medios de comunicación.**

Tradicionalmente, nuestra formación política ha tenido una relación "tensa" con los grandes grupos de comunicación por no considerarse en sintonía ideológica con algunos de ellos, sobre todo con los medios más conservadores. Salvando la labor de aquellos profesionales que verdaderamente entienden que su trabajo debe ser sincero y crítico, la proyección de la actividad política ha estado muy eclipsada sobre todo por los partidos que han alternado gobiernos, como el PSOE y PP, y en momentos puntuales, también por PAR y CHA.

La arquitectura financiera de los medios, que incluye la publicidad institucional, y el falso paradigma de que esos son los únicos grupos políticos con vocación de gobierno, han hecho que, sobre todo desde los despachos directivos de algunos medios se proyecte una imagen de la actividad política de Izquierda Unida muy limitada y distorsionada, con poca o nula relación con la cantidad y calidad del trabajo realizado.

La prensa escrita vive una crisis estructural que se ha agudizado en los últimos años, cayendo el número de ventas vertiginosamente. Pero siguen siendo un referente y, sobre todo en Aragón, marcan las principales corrientes de opinión pública, que muchas veces se confunde con la opinión publicada. Por ello hay que insistir en generar espacio en los medios convencionales, y demostrar que representamos a una izquierda transformadora y con voluntad de ser el partido mayoritario de la sociedad.

Izquierda Unida debe fomentar la creación de medios de comunicación comunitarios locales gestionados por entidades sin ánimo de lucro para abrir brecha entre los grandes medios de comunicación privados. En aquellas localidades donde gobernamos, o donde influimos en la gobernanza, podemos facilitar la concesión de licencias de emisión de emisoras locales de radio y televisión allí donde haya un colectivo con claro interés de constituir un contrapoder mediático. Estos colectivos serían prioritarios sobre entidades privadas. En caso de que pudiéramos tener la capacidad, tras un resultado electoral favorable, de influir en un nuevo gobierno aragonés -o de participar en él- no debemos dejar pasar la posibilidad de decidir acerca de los contenidos de la CARTV. En este escenario la izquierda debe convertir -en la medida de lo posible- la radio y televisión aragonesas en un servicio público que dé una versión de la realidad que hoy día se oculta a los aragoneses. Hay que apostar por un periodismo veraz \*y crítico \*que enfrente la \*escasa pluralidad informativa de los medios privados, muchas veces influidos por intereses económicos; \*apostar por una programación plural y una apuesta por la cultura y los talentos de la tierra. Recuperar espacios en la TV es una tarea acuciante para la izquierda. Hay que combatir al régimen en el terreno de la generación de opinión y consensos que representan hoy la televisión y la radio.

Al margen del trabajo cotidiano con ellos, hay que profundizar en el apoyo a medios alternativos y a otros canales profesionales (generalistas o no, ya sean de radio, TV, prensa escrita, web...) que, sin pertenecer a las grandes empresas de comunicación, ejercen un periodismo crítico y con respeto a los derechos de sus trabajadoras y trabajadores. Y no sólo apoyando sino también promoviendo la aparición de medios de comunicación comunitarios y alternativos en la estrategia de dotar a la mayoría política y social de medios al servicio de sus intereses.

### **III. 3. 2. Internet y redes sociales.**

Ante esta situación respecto a los medios de comunicación convencionales, no debemos ni podemos caer en la inacción. Internet y las redes sociales nos han brindado la mayor posibilidad de comunicación como nunca antes había tenido la izquierda en la historia. Nunca antes nos hemos podido informar con fuentes independientes, ni habíamos podido acceder a informaciones vetadas y censuradas por los principales medios de comunicación.

El camino está empezado pero debemos profundizar y perfeccionar las armas de comunicación que tenemos. Debemos seguir trabajando en las webs territoriales para mejorarlas y cargarlas de contenido. Debemos seguir mandando nuestro mensaje en las redes sociales para que llegue hasta el último rincón. Debemos fomentar los blogs personales de nuestros cargos políticos y personas influyentes que transmitan el mensaje en primera persona sin filtros ni manipulaciones.

Sin duda en este campo de internet es donde somos más fuertes. Y lo somos porque aquí el dinero no es lo importante. Cualquiera puede poder su mensaje en una red social o crearse una web o blog. Y desde luego nuestro empeño y compromiso político sigue estando muy por encima al del resto de políticos de la mayoría de partidos.

No obstante no debemos dormirnos en los laureles y debemos exigir a nuestros simpatizantes y militantes que creen una gran red que reenvíe todas nuestras todas nuestras noticias y mensajes de carácter político para poder llegar al mayor número de personas.

Desde Izquierda Unida Aragón se ha avanzado mucho en los últimos años en este ámbito, entendiendo que las redes son un espacio de difusión ideológica con un gran potencial (además de por su semi-gratuidad, tanto en la producción de contenidos como en el consumo de los mismos).

Otro aspecto en el que profundizar es el ciberactivismo, con el objetivo de crear un equipo de personas militantes que, al igual que están dispuestas a visibilizar la lucha en la calle, desean hacerlo en las redes. Desde Izquierda Unida Federal se suelen promover acciones sincronizadas de este tipo a nivel estatal. Debemos apoyar esas iniciativas y generar otras propias y aprovechar esa red de personas, como últimamente hemos venido haciendo.

Internet, en su más amplio sentido, será el medio de comunicación hegemónico en poco tiempo. Además, tiene la virtualidad de que un grupo pequeño, bien organizado y conectado con otros colectivos sociales con presencia en la red puede multiplicar su mensaje si cuida las vías alternativas de comunicación, sobre todo en las redes sociales, blogs y webs.

